



EL BENEFICIARIO CONTROLADOR EN EL SISTEMA TRIBUTARIO MEXICANO: *ALCANCES Y EFECTOS JURÍDICOS*

- Consideraciones adoptadas por GAFI -como medida de control para combatir la evasión fiscal, el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos-
- Análisis en el derecho comparado
- La actuación de notarios públicos, corredores públicos y terceros que intervengan en la elaboración de figuras y actos jurídicos

Autores

Luis Alberto Placencia Alarcón
Rafael Gómez Garfias
Luis Fernando Balderas Espinosa
José Luis Trejo Porras

Gestión y Diseño Editorial:
Dirección de Cultura Contributiva



D.R. © PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE

Insurgentes Sur 954, Colonia Insurgentes San Borja, Alcaldía Benito Juárez
C.P. 03100, México, CDMX.
Teléfonos: 55 1205-9000, 800 611 0190
www.prodecon.gob.mx

Mayo 2022

Impresión de 3,000 ejemplares

Número de Registro: 03-2022-050411491000-01

Índice

I.	Siglas _____	6
II.	Introducción _____	7
III.	Glosario _____	11
IV.	Antecedentes _____	15
	a) Orígenes del concepto “beneficiario final” _____	15
	b) Recomendaciones internacionales como instrumento fundamental para la prevención de lavado y el financiamiento al terrorismo ____	20
	c) El beneficiario final en el Derecho Comparado _____	25
	1. Estados Unidos de América _____	27
	2. España _____	33
	3. Argentina _____	39
	4. Colombia _____	44
	5. República Dominicana _____	49
V.	¿Qué es el beneficiario controlador? _____	58
VI.	Beneficiario controlador en el Derecho Mexicano _____	63
	a) Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito _____	63
	b) El beneficiario controlador en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita _____	64
	c) El beneficiario controlador en el Derecho Tributario _____	66

- ¿Qué se debe entender por beneficiario controlador? _____ 78
- ¿Cuándo se entiende que se ejerce el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica? _____ 79
- En el caso de fideicomisos, ¿quiénes serán considerados como beneficiarios controladores? _____ 80
- ¿Cuáles son los criterios para identificar la condición de beneficiario controlador? _____ 80
- ¿Quiénes son responsables de identificar al beneficiario controlador? _____ 83
- Obligaciones derivadas de la figura del beneficiario controlador _____ 84
- Si soy notario público o corredor público, ¿tengo la obligación de conservar la información del beneficiario controlador como parte de mi contabilidad? _____ 87
- ¿Qué información deberán obtener y conservar los notarios públicos y corredores públicos, que intervienen en la modificación del capital por aumento? _____ 87
- Procedimiento de solicitud de información sobre los beneficiarios controladores _____ 88
- Casos Prácticos _____ 89
- Mecanismos para identificar, obtener y conservar la información actualizada sobre el beneficiario controlador _____ 96
- ¿Qué información deben conservar las personas morales, fideicomisos y figuras jurídicas? _____ 100
- ¿Qué información deben mantener los terceros que intervienen en la constitución

de las personas morales, fideicomisos y figuras jurídicas? _____	102
• ¿Cómo solicitará el SAT la información a los notarios públicos o corredores públicos? _____	103
• ¿Qué obligaciones deben cumplir las entidades financieras e integrantes del sistema financiero? _____	104
• ¿Cuáles son las entidades públicas que colaborarán con el SAT para verificar la información relativa al beneficiario controlador? _____	105
• ¿Por cuánto tiempo debo conservar la información del beneficiario controlador? _____	106
• Sanciones _____	106
• Nuevo requisito para obtener una Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo _____	108
VII. Facultades de la autoridad fiscal _____	110
a) Visita domiciliaria _____	110
b) Revisión de gabinete _____	114
VIII. Intercambio de información del beneficiario controlador con autoridades extranjeras al amparo de un tratado internacional, regulación en México _____	117
IX. Posibles afectaciones de los sujetos obligados y terceros _____	126
X. Conclusiones _____	132
XI. Apéndice 1 _____	137
XII. Apéndice 2 _____	140
XIII. Apéndice 3 _____	156
XIV. Fuentes de consulta _____	160

I. Siglas

ALA	Antilavado de activos
BRICS	Grupo conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica
CFF	Código Fiscal de la Federación
CFT	Contra el Financiamiento del Terrorismo
DOF	Diario Oficial de la Federación
GAFI	Grupo de Acción Financiera Internacional
GAFILAT	Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
ISR	Impuesto sobre la Renta
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
PRIORPI	Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
RFC	Registro Federal de Contribuyentes
RMF	Resolución Miscelánea Fiscal
SAT	Servicio de Administración Tributaria
UIF	Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

II. Introducción

A nivel internacional se ha promovido la cooperación entre los países para transparentar las operaciones que involucran flujos de ingresos y activos, de tal manera que se facilite la identificación de los beneficiarios efectivos y el intercambio de información, y de esta forma combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la evasión y la elusión fiscal; actos que se encuentran asociados a otras prácticas delictivas.

En este contexto, a nivel global, diversas organizaciones y grupos han impulsado la adopción de medidas de control y transparencia de estas operaciones, pues para que efectivamente sean erradicadas, se requiere un acuerdo internacional; de lo contrario, sólo habrá un cambio de residencia hacia países donde no se exigen dichas medidas.

Es evidente que alcanzar este propósito implica un proceso largo y específico para cada país, pues se requiere adoptar una regulación que transparente la identidad de los verdaderos dueños de las empresas y establecer un registro de acceso público de dicha información. En este sentido, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales (Foro Global), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), han impulsado la estandarización de la figura del beneficiario final, para que los países adopten medidas de control en su regulación interna que permitan recoger e intercambiar la información relacionada a dicha figura y, así, combatir los flujos financieros ilícitos.

Si bien el GAFI emitió el concepto del beneficiario final (norma marco), respecto a los verdaderos dueños de las sociedades, cada país establece su propia definición, así como la información requerida y dónde se almacenará, aunque se cuida que siga

un estándar de información para efectos de su intercambio. Algunos países le han denominado **titular real, beneficiario real, beneficiario final o beneficiario controlador, y han creado un registro público de beneficiarios, lo cual permite proporcionar la información de manera oportuna tanto a autoridades locales como extranjeras.**

A pesar del trabajo realizado hasta ahora, así como de las modificaciones y actualizaciones, acordes con las recomendaciones del GAFI, este organismo ha señalado que los países deben continuar tomando medidas que impidan el uso indebido de las personas jurídicas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, debiendo asegurar que exista información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y sobre quién tiene el control de las personas jurídicas, haciendo posible que ésta pueda ser obtenida, consultada e intercambiada de manera eficaz. Además, deben contemplar sanciones como medida disuasoria ante el incumplimiento de dichos controles por parte de los sujetos obligados.

El presente estudio tiene por objetivo hacer un análisis didáctico de los orígenes de la figura del beneficiario controlador, sus alcances y mostrar que, a partir de las evaluaciones realizadas por el GAFI, los países han implementado la regulación con miras a dar cumplimiento a los compromisos acordados.

Aunque la figura de beneficiario controlador se definió por el GAFI desde 2012, en nuestro país fue hasta 2021 cuando, desde la regulación fiscal, se atendieron las recomendaciones del GAFI relacionadas con la figura del beneficiario final. Ello, a través de la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF), la cual entró en vigor en 2022.

Si bien dicha figura recientemente se legisló en nuestro país, se cuenta con una amplia información, interpretaciones y guías a nivel internacional, que permitirán perfeccionar la regulación aplicable. Asimismo, cabe señalar que, si bien nuestro país no cuenta con un registro público de beneficiarios, conforme a las disposiciones implementadas, el sujeto obligado será quien conserve y actualice la información del beneficiario controlador, misma que podrá ser solicitada por la autoridad fiscal, mediante requerimiento o a través de sus facultades de comprobación.

Parte importante del estudio es hacer una revisión de la regulación aplicable a la figura de beneficiario controlador, abarcando el Código Fiscal de la Federación, así como las reglas de carácter general emitidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pues a través de estas disposiciones legales se han establecido el concepto, los criterios de identificación, los mecanismos para identificar y conservar la información, quiénes son los sujetos obligados, los terceros que participan en la creación de personas morales, los fideicomisos y otras figuras jurídicas, las obligaciones de los sujetos, el procedimiento para que la autoridad fiscal requiera la información, las facultades de comprobación con relación al beneficiario controlador y sanciones, entre otros.

El legislador, al establecer la definición del beneficiario controlador y sus mecanismos de identificación, señaló que para la interpretación del contenido de sus artículos se podrán utilizar las recomendaciones emitidas por el GAFI, siempre que no sean contrarias a las que señala México, por lo que debemos considerar de forma supletoria la información que nos proporciona este grupo en cuanto a dicha figura.

La adopción de la norma marco por parte de México, se inscribe dentro de los esfuerzos internacionales para combatir este tipo de operaciones transnacionales. Recientemente, el 21 de abril de 2022, en su primera reunión bianual, los Ministros del GAFI,¹ además de abordar otros temas que impactan las finanzas internacionales como la corrupción generalizada y la guerra de Ucrania; se comprometieron a actuar de forma rápida y decisiva para mejorar la eficacia de las medidas en todas las jurisdicciones del GAFI, remediando sus importantes deficiencias técnicas de cumplimiento durante la próxima ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI.

Para ello establecieron 6 prioridades estratégicas del próximo bienio, entre las cuales está mejorar la transparencia de la titularidad real internacional. Al respecto, reconocieron la necesidad urgente de una acción sólida y creíble para mejorar aún más la transparencia de los beneficiarios reales tanto a nivel mundial como nacional, por lo que se congratularon de la adopción, en marzo de 2022, de los Estándares del GAFI reforzados sobre los beneficiarios reales de las personas jurídicas, que incluyen el establecimiento de registros de beneficiarios reales u otros mecanismos que brinden a las autoridades acceso eficiente a información precisa y actualizada sobre los beneficiarios reales de las empresas. Además, señalaron que siguen revisando los estándares sobre beneficiarios finales de estructuras jurídicas, como fideicomisos y se comprometieron a implementar con prontitud los requisitos actualizados.

.....
1. En 2020, el Grupo se comprometió a reuniones bianuales, a partir de 2020, para establecer la dirección estratégica del GAFI para el próximo bienio.

III. Glosario

- **Acto terrorista:** Cualquier acto que persigue causar muerte o daños corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no tome parte activa en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, es intimidar a una población o compeler a un Gobierno o a una organización internacional a hacer un acto o dejar de hacerlo.
- **Beneficiario de fideicomiso:** En las recomendaciones del GAFI depende del contexto.
 - Beneficiario fiduciario. Es la persona o personas que tienen derecho al beneficio de un acuerdo fiduciario, puede ser una persona natural o jurídica u otra estructura jurídica. (Fuente: Las recomendaciones de GAFI. Pág. 118).
 - Beneficiario final (GAFI). Persona(s) natural(es) que finalmente posee(n) o controla(n) a un cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica. (Fuente: Las recomendaciones de GAFI. Pág., 119).
- **Cadena de control:** Se entiende por cadena de control el supuesto en que se ostente el control indirectamente, a través de otras personas morales, fideicomisos o cualquier otra figura jurídica. (Regla 2.8.1.20., Párr., segundo de la RMF para 2022).
- **Cadena de titularidad:** Supuesto en que se ostenta la propiedad indirecta de porcentajes de participación en el capital de la persona moral, a través de otras personas

morales. (Regla 2.8.1.20., Párr., segundo de la RMF para 2022).

- **Control:** La habilidad de tomar decisiones estratégicas de la persona jurídica y hacer valer estas decisiones.
- **Corredor público:** Es un profesional del derecho que funge como agente mediador, perito valuador, asesor jurídico y fedatario público. Además, de ser un auxiliar del comercio que brinda a las pequeñas, medianas y grandes empresas servicios jurídicos para agilizar y dar certeza en sus negocios comerciales.
- **Elusión fiscal:** Cuando se evita la ubicación precisa de la conducta del posible sujeto pasivo de la contribución en el hecho generador. Lo anterior se logra mediante la sustitución de una figura jurídica que tipifique la ley como gravable por otra que no encaje en el tipo identificado por la norma fiscal.
- **Estructura jurídica:** Aquellas situaciones en las que una persona natural o jurídica, que es el fiduciario, establece la relación comercial o lleva a cabo la transacción en nombre de los beneficiarios o según los términos del fideicomiso. (Fuente: GAFI Las recomendaciones del GAFI, Pág. 63, pie de página 12).
- **Evasión fiscal:** Es el no pago de una contribución mediante el uso de engaños o aprovechamiento de errores.
- **Fideicomisario:** (México). Persona que cuente con los derechos que se le concedan por virtud del acto constitutivo del fideicomiso, el de exigir su cumplimiento a la institución fiduciaria; el de atacar la validez de los actos que ésta cometa en su perjuicio, de mala fe o en exceso de las facultades que por virtud del acto constitutivo o

de la ley le corresponda, y cuando ello sea procedente, el de reivindicar los bienes que a consecuencia de esos actos hayan salido del patrimonio objeto del fideicomiso. (Art. 390, párrafo primero, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito).

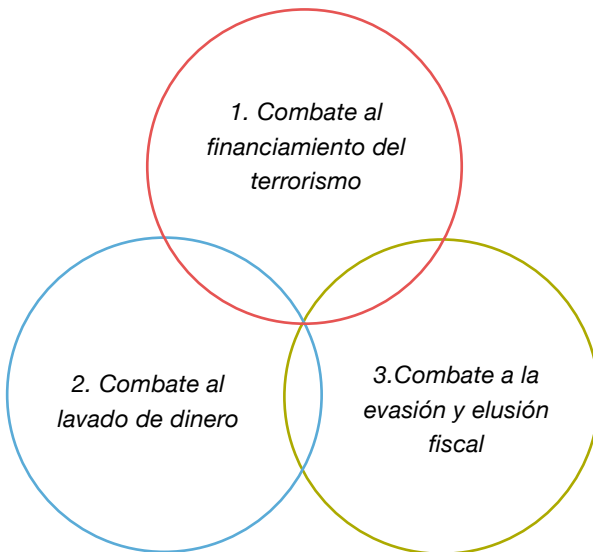
- **Fideicomiso:** (México). Figura jurídica por el que el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y determinados, encomendando la realización de dichos fines a la propia institución fiduciaria. (Art. 381 Ley general de títulos y operaciones de crédito).
- **Fideicomitente:** (GAFI). Persona natural o jurídica que transfieren la titularidad de sus activos a fiduciarios mediante una escritura fiduciaria o un acuerdo similar. (Recomendaciones de GAFI).
- **Fiduciaria:** Son instituciones fiduciarias las expresamente autorizadas para ello conforme a la ley, es decir, las instituciones de crédito. En fideicomisos que tengan por objeto garantizar el cumplimiento de obligaciones además pueden serlo las instituciones de fianzas y de seguros, asimismo, casas de bolsa, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple que cuenten con un registro vigente ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. (Art. 385 y 395, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 46, fracción XV, de la Ley de Instituciones de Crédito).
- **G20:** El Grupo de los Veinte (G20) es el principal foro de coordinación de políticas macroeconómicas entre las veinte economías más importantes del mundo, que incluye las perspectivas tanto de países desarrollados, como de economías emergentes.

- **GAFI:** El Grupo de Acción Financiera Internacional es un organismo intergubernamental independiente, que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero mundial contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
- **Lavado de dinero:** Consiste en ocultar el origen ilícito de bienes y recursos obtenidos a través de actividades ilegales.
- **Notario público:** Es un profesional en Derecho, investido de fe pública por el Estado, que brinda seguridad jurídica y certeza en los actos y hechos de los que da fe con plena autonomía en sus decisiones.
- **Procedimientos de control interno debidamente documentados:** Serán todos aquellos que sean razonables y necesarios para obtener y conservar la información sobre la identificación de los beneficiarios controladores y se considerarán parte de la contabilidad que el SAT podrá requerir. (Regla 2.8.1.21. Párr., primero de la RMF para 2022).
- **Protector(es) (Fiduciario):** Persona, entidad o comité desinteresado, normalmente un abogado, nombrado dentro de un fideicomiso, para ejercer cierto poder sobre los términos de un fideicomiso pero que no es el fiduciario. A diferencia de los fideicomisarios, no son necesarios en ningún fideicomiso.

IV. Antecedentes

a) Orígenes del concepto “beneficiario final”

Como parte del Proceso de Transparencia Internacional, los países han mostrado una gran cooperación en cuanto a establecer medidas de control y transparencia sobre los flujos de ingresos y activos. Al respecto, hay tres grandes objetivos de la comunidad internacional en esta materia:



Por una parte, el combate al terrorismo está dirigido a **proteger la seguridad** de las personas. Las medidas para prevenir el lavado de dinero se enfocan en garantizar igualdad en las condiciones de **competencia entre los agentes económicos**. Finalmente, las acciones para el combate a la evasión y elusión fiscal garantizan la **equidad tributaria**.

Al respecto, sirven de antecedentes en estos temas las siguientes acciones tomadas tanto a nivel internacional, como en nuestro país para combatir los objetivos antes señalados:

- En **1989** fue creado el GAFI por el Grupo de los Siete G-7 (conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido). En abril de 1990, por primera vez, el GAFI dio a conocer 40 Recomendaciones que tienen por objeto proporcionar un plan de acción necesario para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
- En **1996** las Recomendaciones del GAFI fueron revisadas y en 2003 reformuladas, con la intención de integrar los cambios en las tendencias del lavado de dinero y anticipar futuras amenazas.
- En el **2000** México se hizo miembro de la red global del GAFI y, a partir de 2006, ingresó al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). De esta forma comenzó su integración a los esfuerzos internacionales para la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado.
- El **16 de febrero de 2012**, el GAFI publicó una nueva versión de sus Recomendaciones (**40**), de las cuales se destacan las recomendaciones **24 y 25**, que establecen los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, utilizados por más de 180 países, siendo uno de ellos México, estableciendo entre otras cosas en su glosario la definición de beneficiario final², misma que se transcribe:

Concepto: *Beneficiario final se refiere a la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee o controla a un cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica.*

2. Las recomendaciones del GAFI. Consulta en: <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf>

- El **17 de octubre de 2012**, México publicó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley PRIORPI o más comúnmente conocida como Ley Antilavado), la cual, en su artículo 3°, fracción III, define la figura del beneficiario controlador atendiendo a las recomendaciones 24 y 25 del GAFI.
- En la Cumbre del G-20 celebrada en San Petersburgo, el **6 de septiembre de 2013**, se emitió un comunicado mediante el cual se alentó a los países a hacer frente a los riesgos planteados por la opacidad de los vehículos corporativos y a comprometerse en la aplicación de las normas del GAFI sobre el beneficiario final.³
- Derivado de los acuerdos del Foro Global⁴ llevados a cabo en Barbados el **28 y 29 de octubre de 2015**, se reforzó su norma de Intercambio de Información Previa Petición (norma IIPP), de cara a la segunda ronda de evaluaciones, introduciendo en sus evaluaciones el concepto de beneficiario final, tal como lo definió el GAFI⁵. Asimismo, en **2016** se aprobaron las directrices en las que se introdujo el requisito de que la información del beneficiario se encuentre disponible.
- México avanzó con la publicación de la Ley de Antilavado; sin embargo, aún tenía pendiente el tema de **combatir la evasión y elusión fiscal**. Por ello, en la Cumbre Anticorrupción de Londres de **2016**, México se comprometió a mejorar la transparencia sobre quién en última instancia posee y controla las sociedades, así

.....

3. Guía sobre transparencia y beneficiario final (recomendaciones 24 y 25), GAFI.

4. El Foro Global fue fundado en 2000 por la OCDE con el fin de elaborar normas en materia de derecho fiscal y tributario, así como se encarga del proceso de seguimiento exhaustivo y revisión inter pares sobre la implementación de las normas sobre transparencia e intercambio de información con fines tributarios y, más específicamente, de la norma sobre intercambio de información previa petición.

5. Intercambio de información previa petición, Manual sobre revisiones inter pares. Consulta en: <https://www.oecd.org/tax/transparency/global-forum-handbook-2017-spanish.pdf>

como otras entidades jurídicas, con el fin de exponer las irregularidades y desbaratar actividades ilícitas; así como garantizar la información básica precisa y oportuna sobre el beneficiario controlador, por lo cual, se indicó que se requería de mecanismos para garantizar la aplicación de la ley, como el establecimiento de registros públicos.⁶

- Derivado de las recomendaciones, foros y compromisos, el **8 de septiembre de 2021**, México publicó en la Gaceta Parlamentaria No. 5864-D, la Iniciativa del Ejecutivo Federal que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales, entre ellas las del CFF, en la cual se propuso someter a consideración la normatividad referente a la introducción de la figura del beneficiario controlador.
- Finalmente, el **12 de noviembre de 2021**, se publicó en el DOF la reforma al CFF, en el que se adicionaron los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter, 32-B Quinquies, 84-M y 84-N, con la finalidad de que México cumpla los estándares internacionales que exigen niveles de transparencia mínimos con relación a los beneficiarios controladores de sociedades mercantiles, fideicomisos y otras figuras jurídicas con fines fiscales.

.....
6. Anti-corrupción Summit | London 2016- Communiqué 12 May, consultable en el sitio URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/522791/FINAL_-_AC_Summit_Communique_-_May_2016.pdf

Línea del tiempo.

Antecedentes del Beneficiario Controlador

- 
- 1989**
Creación del GAFI.
- 1990**
El GAFI da a conocer sus recomendaciones.
- 2000**
México es miembro del GAFI.
- 2006**
México ingresa al GAFILAT.
- 2012**
El GAFI emite recomendaciones 24 y 25, así como el concepto de beneficiario final.
- México emite la Ley PRIORPI de lavado de dinero e introduce el concepto de beneficiario final.*
- 2013**
El G20 invita a los países a introducir la figura de beneficiario final del GAFI.
- 2015**
El Foro Global introduce y estandariza la figura del beneficiario final.
- 2016**
México se compromete a establecer un registro público de beneficiarios.
- 2021**
México publica en el DOF la reforma al CFF introduciendo la figura de beneficiario final.

b) Recomendaciones internacionales como instrumento fundamental para la prevención de lavado y el financiamiento al terrorismo

Las recomendaciones del GAFI se reconocen como el estándar global antilavado de activos (ALA) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT). Como se ha señalado, fueron emitidas en 1990 y han sufrido modificaciones a lo largo del tiempo, a fin de adecuarse a las nuevas formas de lavado de dinero y ser más efectivos en su combate. Para tal efecto, se integraron 9 Recomendaciones Especiales, entre otros cambios.

Dichas recomendaciones constituyen los estándares internacionales utilizados por más de 180 países para combatir eficazmente y de manera global los mencionados delitos, así como para evitar el uso de los sistemas financieros con fines ilícitos.⁷ Seis de esas recomendaciones son relevantes para la transparencia de los beneficiarios finales:

- **Rec.10:** debida diligencia del cliente.
- **Rec.11:** mantenimiento de registros.
- **Rec.17:** dependencia de terceros.
- **Rec.22:** debida diligencia del cliente de las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD).⁸
- **Rec.24:** transparencia de beneficiarios finales de las personas jurídicas.

7. Informe sobre el GAFI publicado por la SHCP y CNBV.
Consulta en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/80948/VSPP_GAFI__13042016.pdf

8. El GAFI se refiere al deber de identificar al cliente y beneficiario final, recopilar información, y monitorear las transacciones. <https://www.infolaft.com/que-es-debida-diligencia/>

- **Rec.25:** transparencia y titularidad de los arreglos legales y sus notas interpretativas.

Cabe mencionar que las recomendaciones 24 y 25 de los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y la proliferación de Armas de Destrucción Masiva; son las que fueron retomadas por México en la reforma fiscal del CFF para 2022. Dichas recomendaciones señalan lo siguiente:

Personas jurídicas	Estructuras jurídicas
<p>Recomendación 24. <i>Los países deben tomar medidas para impedir el uso indebido de las personas morales para lavado de dinero y fuerza terrorista. Los países deben asegurar que exista información adecuada, precisa y actualizada sobre los beneficiarios finales y el control de las personas morales, que las autoridades competentes puedan obtener o a la que pueda tener acceso oportunamente...</i></p>	<p>Recomendación 25. <i>Los países deben tomar medidas para prevenir el uso indebido de las estructuras jurídicas para el LA/FT. En particular, los países deben asegurar que exista información adecuada, precisa y actualizada sobre los fideicomisos, incluyendo información sobre el fideicomitente, fiduciarios y beneficiarios y que dicha información pueda ser proporcionada a la autoridad competente de forma oportuna...</i></p>

Asimismo, el GAFI emitió una guía de implementación de la transparencia sobre los beneficiarios finales, en la que sugiere los pasos por parte de los países para la regulación de dicha figura, donde se destaca lo siguiente:

Las definiciones de beneficiario final deberán:

- *Indicar que es una persona física.*
- *Abarcar todas las formas relevantes de titularidad y control.*
- *Especificar que la titularidad y el control pueden ejercerse de manera directa e indirecta.*
- *Asociar una lista no exhaustiva de ejemplos en los cuales se puede manifestar una relación de beneficiario final.*
- *Mencionar la clara exclusión de los agentes, las entidades custodias, los empleados, los intermediarios o las personas designadas que actúan en representación de otra persona que se considera un beneficiario final.*
- *Utilizar valores absolutos, en lugar de rangos, a la hora de definir la titularidad o el control que ejerce una persona en una empresa.*

Sanciones

Para asegurar que se proporcione a las autoridades información precisa y oportuna sobre los beneficiarios finales, será necesario contar con un sistema de sanciones y cumplimiento, debiendo asegurar que:

- 1)** *Existan sanciones adecuadas para los casos de incumplimiento en la legislación;*
- 2)** *Los organismos tengan un mandato jurídico para imponer sanciones, y*
- 3)** *El órgano sancionador posea la suficiente capacidad, recursos y voluntad para verificar las divulgaciones y sancionar los casos de incumplimiento.*

Publicación de datos

Los países pueden publicar los datos sobre los beneficiarios finales de conformidad con las leyes nacionales de protección de datos y privacidad o, en su defecto, con las normas internacionales de datos y privacidad.

Información a recopilar

Estructurar la información sobre los beneficiarios finales en un formato estándar hace que resulte más fácil vincularla con los datos de otras jurisdicciones para comprender mejor las estructuras de titularidad internacional. Esto permite reducir tanto la necesidad de recurrir a solicitudes prolongadas y formales de asistencia jurídica recíproca entre las distintas autoridades de las jurisdicciones como la cantidad de recursos destinados a ellas.

Por otro lado, en el Foro Global de la OCDE, el cual, es el encargado de asegurar la implementación efectiva de los estándares de transparencia fiscal internacional entre sus miembros y otras jurisdicciones relevantes. Dicho Foro ha adoptado la definición de beneficiario final del GAFI, aprovechando las similitudes de sus procedimientos de cumplimiento para una definición de manera eficiente, lo cual ha sido promovido por el G-20.

Asimismo, el Foro cuenta con un Manual sobre beneficiarios finales, que señala que la transparencia fiscal sigue siendo un asunto clave para los gobiernos y el público en general, según lo demuestra la continua cobertura mediática respecto a las filtraciones de datos de los últimos años, mismas que han

evidenciado como la evasión fiscal no es un delito financiero aislado, sino que, con frecuencia, se vincula a un amplio conjunto de actividades, incluido el lavado de activos y la corrupción, que impactan negativamente en la sociedad. Por ejemplo, filtraciones revelaron el uso de sociedades mercantiles y fideicomisos para ocultar a los beneficiarios finales de activos, y resaltaron el papel clave que la transparencia sobre la información de titularidad de las personas jurídicas tiene en la prevención de la evasión fiscal, la corrupción y otras actividades relacionadas.

Dicho manual también establece que en lo concerniente a esta figura deberán acotarse a los temas de evasión y elusión fiscal, no así al lavado de dinero y terrorismo, como lo señala el GAFI. Tal como se precisa a continuación:

- La aplicación e interpretación de las recomendaciones no deben ir más allá de lo que es apropiado para asegurar el efectivo intercambio de información con fines fiscales.
- No considera a entidades que no suponen un peligro de evasión fiscal.
- Las evaluaciones del Foro ayudan a descartar deficiencias detectadas en la implementación de las recomendaciones 24 y 25 del GAFI o si la información sobre el beneficiario final se encuentra disponible conforme al marco legal.⁹

Supervisión y ejecución normativa

Si el proceso de evaluación del Foro Global procura verificar si en la práctica, se llevan adelante las actividades de supervisión

.....

9. Un ejemplo claro es México, toda vez que derivado de la evaluación mutua realizada por el Foro, se detectó su incumplimiento en materia fiscal, al no haber introducido en sus disposiciones fiscales la figura del beneficiario controlador, a diferencia del cumplimiento en materia de lavado de dinero en la Ley PRIORPI.

para asegurar que las personas relevantes cumplan con la ley aplicable. El GAFI hace lo mismo por medio de su evaluación de la efectividad práctica en los resultados intermedios, información que se puede revisar a través de las evaluaciones mutuas entre pares.

c) El beneficiario final en el Derecho Comparado

Como hemos señalado, el GAFI fija estándares y promueve la efectiva implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.

Los Miembros del GAFI son las jurisdicciones y organizaciones que han acordado trabajar conjuntamente, bajo la forma de un grupo de trabajo, hacia ciertos objetivos comunes establecidos en su mandato, comprometiéndose a:

- a)** Respaldar y promover la efectiva implementación de las Recomendaciones del GAFI entre sus jurisdicciones miembro; y
- b)** Apoyar de forma sistemática las “revisiones entre pares” o “evaluaciones mutuas” y procesos de seguimiento utilizando la metodología y procedimientos de evaluación acordados.

Los miembros del GAFI son: Argentina, Italia, Australia, Japón, Austria, Reino de los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Brasil, México, Canadá, Nueva Zelanda, China, Noruega, Dinamarca, Portugal, Comisión Europea, República de Corea, Finlandia, Federación Rusa, Francia, Singapur, Alemania, Sudáfrica, Grecia, España, Consejo de Cooperación del Golfo, Suecia,

Hong Kong, Suiza, Islandia, Turquía, India, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos de América.¹⁰

Asimismo, el GAFI cuenta con diversos Miembros Asociados del GAFI, tales como:

- Grupo de Asia/Pacífico sobre blanqueo de capitales (APG)¹¹
- Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)
- Comité de Expertos del Consejo de Europa sobre la Evaluación de las Medidas contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (MONEYVAL)¹²
- Grupo Euroasiático (EAG)
- Grupo contra el lavado de dinero de África Oriental y Meridional (ESAAMLG)
- Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)¹³
- Grupo de Acción Intergubernamental contra el Lavado de Dinero en África Occidental (GIABA)
- Grupo de Trabajo de Acción Financiera de Medio Oriente y África del Norte (MENAFATF)
- Task Force on Money Laundering in Central Africa (GABAC)

Si los miembros no cumplen con las Recomendaciones del GAFI, pueden ser sancionados. Las sanciones pueden incluir

.....
10. Mandato del Grupo de Acción Financiera Internacional (2012-2020). Versión final mayo 2011. Consulta en: https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/Mandato_GAFI_2012-2020%20ESP%20versi%C3%B3n%20final%20mayo11.pdf

11. Dentro de sus países miembros se encuentra Estados Unidos.

12. En este grupo podemos encontrar a España.

13. Dentro de sus miembros encontramos a Colombia y República Dominicana.

una carta explicando la importancia de cumplir; ser incluido en una Declaración Pública que puede dificultar gravemente sus relaciones internacionales y especialmente financieras, y en última instancia, ser suspendido o expulsado como Miembro.¹⁴

A continuación, se analizarán algunos países para señalar cuáles son sus ordenamientos jurídicos; la denominación y definición que le dan al beneficiario final; los sujetos obligados; la autoridad encargada de requerir la información; si cuentan con un registro público de beneficiarios finales; la información requerida; el periodo de conservación y las evaluaciones mutuas que establecen la eficiencia y el cumplimiento de los estándares internacionales de algunos países.

1. Estados Unidos de América

Estados Unidos de América es miembro del GAFI desde 1990 y es una de las Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras (COSUN) del GAFIC. Asimismo, es miembro de APG. Este país se ha sumado a la lista de países que han optado por aumentar la transparencia empresarial y financiera, acercándose a otras economías desarrolladas.

Ordenamiento legal

- La Ley del Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés) de 1970, es la columna vertebral, mediante ella, el Gobierno Estadounidense comenzó a regular de manera directa las operaciones bancarias y de instituciones financieras similares, con la finalidad de detectar, a través de múltiples registros y avisos, las operaciones

.....

14. ¿Cuáles son las Recomendaciones del GAFI y cómo afectan a nuestros miembros? Consulta en: <https://www.cfatf-gafic.org/es/cuales-son-las-recomendaciones-del-gafi-y-como-afectan-a-nuestros-miembros>

que pudieren considerarse como encaminadas a “lavar dinero”¹⁵.

- Debido al poco impacto que tuvo la BSA en las operaciones y transacciones encaminadas a lavar dinero, el Congreso de los Estados Unidos de América aprobó la Ley de Control de Lavado de Dinero en 1986¹⁶. Dicha Ley tipificó el delito de lavado de dinero, sancionándolo con pena de prisión hasta por 20 años y autorizó la confiscación de ganancias obtenidas por los lavadores; además de proporcionar a las autoridades federales herramientas adicionales para investigar el lavado de dinero¹⁷.
- En 1992, la BSA fue enmendada por la Ley *Annunzio-Wylie* contra el Lavado de Dinero, con el objetivo de facultar a la Tesorería de los Estados Unidos de América y a la Junta de la Reserva Federal para regular las transferencias de fondos nacionales e internacionales; así como para endurecer las sanciones a las violaciones de la BSA¹⁸.

Dentro de las enmiendas que trajo esta Ley estuvo la autorización a la Tesorería para requerir a cualquier tipo de entidad financiera, así como a sus directores, empleados y representantes legales, que le notificaran cualquier tipo de operación sospechosa que pudiese ser considerada como violatoria de alguna ley o reglamento.

En el tema de sanciones, aumentó las penas para las instituciones depositarias que sean condenadas por participar

.....
15. “El Lavado de Dinero en México”, abril 2008, p. 17, artículo que puede ser consultable en el sitio URL: <http://perezdeacha.mx/wp-content/uploads/2018/08/Lavado-de-Dinero-8-abr-08.pdf>

16. *Ibidem*, p. 20

17. ROMO, Jorge L., “El lavado de dinero y su vinculación con actividades de apuestas y juegos de azar en la legislación mexicana”, p. 202, consultado en el sitio URL: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2803/11.pdf>

18. Óp. cit. “El Lavado de Dinero en P.20 y 21.

en operaciones o transacciones del lavado de dinero; e igualó las penas establecidas para el delito de lavado de dinero con las de tentativa o conspiración para su comisión.

- La Ley de Supresión de Lavado de Dinero de 1994 y la Ley de Estrategia de Lavado de Dinero y Delitos Financieros de 1998, ampliaron los procedimientos de revisión, capacitación y análisis respecto al tema de lavado de dinero.
- Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, el Congreso de los Estados Unidos de América aprobó la Ley Patriota (USA Patriot Act). Esta Ley, en su Título III estableció varias reformas a la BSA y a la Ley de Control de Lavado de Dinero, a fin de facilitar la prevención, detección y persecución del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo¹⁹.

En este mismo Título se fortalecieron las normas bancarias relativas al lavado de dinero, especialmente con relación a las transacciones y operaciones internacionales. Asimismo, se modificó la BSA respecto de las comunicaciones, avisos y reportes entre las autoridades y las instituciones bancarias, así como las obligaciones de las instituciones financieras de conservar registros y se establecieron disposiciones relacionadas con la prevención del contrabando y la falsificación de dinero.

- En diciembre de 2020, el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América aprobaron la Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) para el año fiscal 2021, la cual incluye tanto la Ley contra el Blanqueo de Capitales



19. *Ibidem* p. 22.

(AML) como la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) que se reconoce como una enmienda a la Ley Contra el Lavado de Dinero (AMLA).²⁰

Concepto

En los Estados Unidos de América al beneficiario final se le conoce como *Ultimate Beneficial Owner* o *UBO*, y la “Ley Contra el Lavado de Dinero” lo define como una persona física que “directa o indirectamente, a través de cualquier contrato, acuerdo, entendimiento, relación o de otro modo ejerce un control sustancial sobre la entidad, o posee o controla no menos del 25% de las participaciones de la entidad”.²¹

Asimismo, cuenta con tres indicadores de control sustancial:

- 1) prestar servicios como ejecutivo superior de una empresa;
- 2) contar con autoridad para el nombramiento o destitución de cualquier ejecutivo superior o de la mayoría de los miembros de la junta; y
- 3) contar con suficiente influencia sobre asuntos importantes de la empresa.²²

Sujetos obligados

Los sujetos obligados son corporaciones nacionales, compañías de responsabilidad limitada o cualquier otra entidad similar que se constituye mediante la presentación de un documento ante un secretario de estado o una oficina similar bajo la ley de un estado o tribu india o formada bajo la

20. AMLA 2020: regulación de EEUU que impactará a oficiales de cumplimiento. Infolaft, Anticorrupción, fraude, LA/FT. Consulta en: <https://www.infolaft.com/aml-2020-regulacion-de-ee-uu-que-impactara-a-oficiales-de-cumplimiento/#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20AMLA%202020%3F,recursos%20necesarios%20para%20su%20funcionamiento>.

21. El beneficiario final en los Estados Unidos: los nuevos requisitos de información. Consulta en: <https://www.tmf-group.com/es-co/news-insights/articles/2021/july/ubo-in-the-usa/#:~:text=La%20ley%20define%20a%20un,las%20participaciones%20de%20la%20entidad%22>.

22. Estatus de las nuevas obligaciones sobre la identificación de beneficiario final en los Estados Unidos de América. Consulta en: <https://www.delitosfinancieros.org/estatus-de-las-nuevas-obligaciones-sobre-la-identificacion-de-beneficiario-final-en-ee-uu/>

ley de un país extranjero y registrada para hacer negocios en Estados Unidos.

Información requerida

De acuerdo con la regulación, las empresas informantes solo necesitarán presentar cuatro datos sobre cada beneficiario final:

- Nombre.
- Fecha de nacimiento.
- Dirección actual de residencia o la dirección actual de la sociedad.
- Número de identificación único procedente de un pasaporte o licencia de conducir estadounidense vigente, un documento de identificación vigente expedido por un Estado, gobierno local o Tribu India en los Estados Unidos de América, o si la persona no tiene ninguno de los documentos mencionados, un pasaporte vigente expedido por un gobierno extranjero un número de identificación único asignado por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés).

Autoridad encargada de las obligaciones

El FinCEN recopila millones de informes de actividades sospechosas, conocidos como SAR. Los pone a disposición de las agencias de aplicación de la Ley de EEUU y muestra parte de esa información a través del Grupo Egmont²³, una coalición poco conocida de unidades de inteligencia financiera de más de 150 países y territorios.²⁴

.....

23. Instancia internacionalmente reconocida que reúne a más de 150 Unidades de Inteligencia Financiera de diferentes jurisdicciones del mundo, cuyo objetivo es fomentar la cooperación y el intercambio de información entre ellas (a través de la Red Segura de Egmont- ESW) para luchar de manera coordinada contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

24. https://www.buzzfeednews.com/article/jasonleopold/fincen-files-financial-scandal-criminal-networks?bftwnews&utm_term=4ldqpgc#4ldqpgc

La red tiene acceso a una variedad de sistemas de rastreo, que se pueden usar para rastrear fondos, así como personas, en busca de patrones de comportamiento indicativos de fraude u otras actividades financieras cuestionables. Una persona sin ingresos conocidos que mueva grandes cantidades de efectivo, por ejemplo, se considerará sospechosa y será objeto de un seguimiento más cercano.²⁵

Cuenta con registro de beneficiarios

La Red de Ejecución de Delitos Financieros o FinCEN, recopila los informes de actividades sospechosas (SAR) y los pone a disposición de las agencias de aplicación de la Ley y las operaciones de inteligencia financiera de otras naciones. Además, compila un informe llamado “Kleptocracy Weekly”.²⁶

Periodo de conservación de información

Todos los registros de la BSA deben ser conservados durante un período de cinco años y ser archivados o almacenados, de manera tal que sean accesibles dentro de un período razonable de tiempo.²⁷

Eficiencia y cumplimiento

Respecto a la evaluación realizada por el GAFI a los Estados Unidos de América en 2016, ésta no cumplió con las recomendaciones 24 y 25. Posteriormente, el GAFI señaló que, desde la evaluación de 2016, los Estados Unidos de América

.....

25. ¿Qué es la Red de Ejecución de Delitos Financieros? Consulta en: [https://spiegato.com/es/que-es-la-red-de-ejecucion-de-delitos-financieros#:~:text=La%20Red%20de%20Ejecuci%C3%B3n%20de%20Delitos%20Financieros%20\(FinCEN\)%20es%20un,la%20Ley%20de%20secreto%20bancario](https://spiegato.com/es/que-es-la-red-de-ejecucion-de-delitos-financieros#:~:text=La%20Red%20de%20Ejecuci%C3%B3n%20de%20Delitos%20Financieros%20(FinCEN)%20es%20un,la%20Ley%20de%20secreto%20bancario).

26. <https://www.buzzfeednews.com/article/jasonleopold/fincen-files-financial-scandal-criminal-networks>

27. Una Guía para Empresas de Servicios Monetarios, Consulta en: https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/mlp_spa_prevention_guide.pdf Págs. 9 y 10.

habían emprendido una serie de medidas para fortalecer su marco y que se encontraba inmerso en un proceso de mejora de cumplimiento. Sin embargo, en la última evaluación, realizada en el 2020, el GAFI volvió a calificar como no cumplida la recomendación 24, mientras que la recomendación 25 se evaluó como parcialmente cumplida.²⁸

Tal como se precisó en *United States 3rd Enhanced Follow-up Report & Technical Compliance Re-Rating*, emitido por la FATF, se señaló que: “Los Estados Unidos de América cumplen con 9 de las 40 recomendaciones y cumple en gran medida con 22 de ellas. Sigue cumpliendo parcialmente con 5 de las 40 Recomendaciones y no cumple con 4 de ellas.” Así, los Estados Unidos de América permanecen en mejora de cumplimiento e informará al GAFI sobre el progreso para fortalecer su implementación de medidas contra el lavado de dinero/financiamiento del terrorismo.²⁹

2. España

España es miembro del GAFI desde 1990, siendo unos de los países mejor posicionados en la materia, pues de las evaluaciones cumple 38 de las 40 recomendaciones emitidas por dicho Grupo, el cual goza de un sistema institucional y financiero “atractivo y seguro” para los inversores, repercutiendo en las relaciones financieras y comerciales con el resto del mundo.

.....

28. Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures. Consulta en: <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/fur/Follow-Up-Report-United-States-March-2020.pdf>

29. Avances de los Estados Unidos de América en el fortalecimiento de las medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Consulta en: <http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fur-united-states-2020.html>

Ordenamiento legal

- La obligación de identificar a los titulares reales de las personas jurídicas nació con la Ley 10/2010 de 28 de abril de 2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- El Registro de Titularidades Reales nace con la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo de 2018, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación.
- El Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril de 2021, de transposición³⁰, entre otras, de la directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales —Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018—, añade dos nuevas disposiciones adicionales a la Ley 10/2010, de 28 de abril de 2010, para regular la creación en el Ministerio de Justicia de un Registro de Titularidades Reales que sea central y único en todo el territorio nacional.
- El intercambio de información con Unidades de Inteligencia Financiera de Estados de la Unión Europea se lleva a cabo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 a 57 de la Directiva 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para la prevención del blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, así como el intercambio de información con Unidades de Inteligencia Financiera de Estados de la Unión Europea.

.....
30. Transponer: Dicho de un Estado miembro de la Unión Europea: Incorporar a su ordenamiento interno una directiva emanada de esta. <https://dle.rae.es/transponer>

Concepto

En este país, al beneficiario final se le denomina titular real, que es: **i)** la persona o personas físicas por cuya cuenta se pretende establecer una relación de negocios o intervenir en cualesquiera operaciones; y **ii)** la persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de una persona jurídica. Cuando no exista persona física con control sobre el citado 25 por ciento o que por otros medios ejerza el control, se considerará que lo ejerce el administrador o los administradores, según sea el caso.

En el caso de los fideicomisos (estructura jurídica), como el trust anglosajón, tendrán la consideración de titulares reales:

- El fideicomitente o fideicomitentes,
- El fiduciario o fiduciarios,
- El protector o protectores, si los hubiera,
- Los beneficiarios o, cuando aún estén por designar, la categoría de personas en beneficio de la cual se ha creado o actúa la estructura jurídica; y
- Cualquier otra persona física que ejerza en último término el control del fideicomiso a través de la propiedad directa o indirecta o a través de otros medios.

Sujetos obligados

Entre otros, se pueden mencionar a las siguientes personas jurídicas y físicas:

- Las entidades de crédito.
- Las empresas de servicios de inversión.
- Las entidades gestoras de fondos de pensiones.
- Las entidades de dinero electrónico.
- Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades.
- Los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.

Obligaciones

Los sujetos obligados identificarán al titular real y adoptarán medidas adecuadas, a fin de comprobar su identidad, con carácter previo al establecimiento de relaciones de negocio o a la ejecución de cualesquiera operaciones.

Información requerida

La información que deben recabar los sujetos obligados y proporcionar por parte de las personas físicas que tengan la condición de titulares reales, son:

- Nombre y apellidos.
- Fecha de nacimiento.
- Tipo y número de documento identificativo (en el caso de nacionales españoles o residentes en España se incluirá siempre el documento expedido en España).
- País de expedición del documento identificativo, en caso de no utilizarse el Documento Nacional de Identidad o la tarjeta de residente en España.

- País de residencia.
- Nacionalidad.
- Criterio que cualifica a esa persona como titular real.
- En caso de titularidades reales por propiedad directa o indirecta de acciones o derechos de voto, porcentaje de participación, con inclusión, en el caso de propiedad indirecta, de la información sobre las personas jurídicas interpuestas y su participación en cada una de ellas.
- Aquellos otros que, mediante norma reglamentaria, puedan determinarse.

Registro de Titularidades Reales (RETIR)

El RETIR es un registro público permanentemente actualizado y gestionado completamente de forma electrónica. Es llevado por el Registro Mercantil, gestiona y da publicidad a las titularidades reales de personas físicas, de forma directa o indirecta, de más del 25% del capital social de las personas jurídicas.

Conservación de la información por el RETIR

La información obrante en este Registro se conserva y actualiza por los sujetos obligados durante la vida de las personas jurídicas o entidades o estructuras sin personalidad jurídica (o durante el tiempo en que se prolongue la relación de negocios o la propiedad de los inmuebles), y se mantendrá por un periodo de 10 años tras su extinción (o por un periodo de **10 años** tras la finalización de la relación de negocios, la venta del inmueble o la terminación de la operación ocasional).

Autoridad encargada

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), es la autoridad española supervisora en materia de prevención de blanqueo de capitales. Además, es la unidad de inteligencia financiera de España y tiene la misión de asegurar el cumplimiento por parte de los sujetos obligados de sus deberes de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Eficiencia y cumplimiento

En la evaluación mutua de España, realizada en diciembre de 2014, el GAFI concluyó que el país enfrenta una variedad de riesgos de lavado de dinero, incluido el crimen organizado y el narcotráfico, así como amenazas continuas de terrorismo y financiamiento del terrorismo.

El GAFI señaló que, si bien las autoridades españolas han sido efectivas para interrumpir el financiamiento de grupos terroristas, persisten debilidades en la implementación de sanciones financieras específicas, para permitir el congelamiento de activos relacionados con el terrorismo. Asimismo, en la evaluación se indicó que las medidas contra el blanqueo de capitales aplicadas por bancos y notarios **son fuertes**, en particular el sistema para prevenir el uso indebido de empresas; sin embargo, la implementación en otros sectores es variable³¹. El GAFI concluyó que España **cumple en gran medida** con las recomendaciones 24 y 25.³²

31. <https://www.fatf-gafi.org/countries/s-t/spain/documents/spain-strong-aml-cft-measures-but-improvements-needed.html>

32. Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – Spain. Consulta en: <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/7-Legal-persons-and-arrangements-Mutual-Evaluation-Spain-2014.pdf>

3. Argentina

Este país es miembro del GAFI desde el 2000, así como integrante fundador del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD).

Ordenamiento legal

- Código Civil y Comercial Unificado, en su artículo 1669, establece que los contratos de fideicomiso deben registrarse en el registro público que corresponda.³³
- La Resolución IGJ 7/2015, determinó que, en virtud de lo establecido en el Código Civil y Comercial Unificado, era necesario determinar las reglas, procedimientos y requisitos necesarios, a efecto de registrar los contratos de fideicomiso ante el Registro Público.³⁴

En atención a ello, en el artículo 50.2.d) se establecieron los trámites registrales que requieren incluir declaración del beneficiario final; mientras que en el artículo 284, se limitó el registro de fideicomisos y sus beneficiarios controladores para aquellos que tengan un fiduciario con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires³⁵, o acciones en sociedades registradas en la IGJ, o bienes registrables.

Asimismo, en el artículo 510.6 se estableció la definición de beneficiario final y en el artículo 518 se estableció que se debería declarar anualmente al beneficiario controlador de sociedades, locales y extranjeras, y fideicomisos.³⁶

.....
33. Código Civil y Comercial de la Nación. Consulta en: El ordenamiento legal fue consultado en el sitio URL: http://www.saij.gob.ar/docs-f/codigo/Codigo_Civil_y_Comercial_de_la_Nacion.pdf

34. <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-7-2015-249837/texto>

35. No existe un registro central, cada jurisdicción organiza su registro y por el momento sólo lo tiene la Ciudad de Buenos Aires para el caso de fideicomisos.

36. Regulación sobre beneficiarios finales en América Latina y el Caribe. Consulta en: <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Regulaci%C3%B3n-sobre-beneficiarios-finales-en-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe.pdf>

- La Resolución CNV 687/2016 estableció que la Comisión Nacional de Valores para sociedades que cotizan en bolsa, requiere identificar a los beneficiarios finales.³⁷
- La Resolución N° 112/2021 establece el concepto de beneficiario final, así como la forma en que la Unidad de Información Financiera identificará al beneficiario final.³⁸
- La Ley 25.246³⁹, en la cual se establece la autoridad encargada de solicitar la información y documentación relacionada con el beneficiario final.

Concepto

De conformidad con el artículo 2° de la Resolución N° 112/2021 de la Unidad de Información Financiera, el **beneficiario final** es la o las personas humanas que posean como mínimo el diez por ciento (10%) del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión, un patrimonio de afectación y/o de cualquier otra estructura jurídica; y/o a la o las personas humanas que por otros medios ejerzan el control final de las mismas.

Autoridad encargada de requerir información

La Unidad de Información Financiera será la encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información, a efecto de prevenir e impedir los delitos de **lavado de activos y financiamiento del terrorismo**; por lo que dicha autoridad estará facultada para **solicitar informes, documentos, antecedentes**, así como otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público,

.....
37. Ídem.

39. Ley consultable en el sitio URL: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/62977/textact.htm#:~:text=ARTICULO%2020,la%20ley%2021.526%20y%20modificadoras>.

nacional, provisional o municipal, y a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije.

Sujetos obligados

Los sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera sobre el beneficiario final, para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, son los siguientes:

- Las entidades financieras.
- Las personas humanas o jurídicas autorizadas por el Banco Central de la República Argentina para operar en la compraventa de divisas.
- Las personas humanas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar.
- Personas humanas y/o jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de Valores para actuar como intermediarios en mercados autorizados.
- Personas jurídicas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para actuar en el marco de sistemas de financiamiento colectivo.
- Los registros públicos de comercio, los organismos representativos de fiscalización y control de personas jurídicas, los registros de la propiedad inmueble, los registros de la propiedad automotor, los registros prendarios, los registros de embarcaciones de todo tipo y los registros de aeronaves.
- Las empresas aseguradoras.
- Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra.

- Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete.
- Los escribanos públicos.

Información requerida

Los sujetos obligados, en todos los casos, deberán identificar al beneficiario final, así como mantener actualizada la información respecto de éste, debiendo presentar una **declaración jurada**, la cual deberá contener los siguientes datos:

- Nombre/s y apellido/s.
- Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Domicilio real.
- Nacionalidad.
- Profesión.
- Estado Civil.
- Porcentaje de participación y/o titularidad y/o control.
- Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT)/ Código Único de Identificación Laboral (CUIL)/Clave de Identificación (CDI), en caso de corresponder.

Registro de beneficiarios

Respecto de los registros públicos de fideicomisos o estructuras jurídicas, cada provincia organiza su propio registro y dicta sus normas reglamentarias; siendo que actualmente dicho país sólo cuenta con información de los beneficiarios finales de los fideicomisos cuyo objeto son cuotas o que cuentan con una definición y un procedimiento para la presentación de dicha

información, mientras que de los restantes fideicomisos no es posible acceder a la información de los beneficiarios finales.⁴⁰

Periodo de conservación de información

No se identificó en los ordenamientos legales que regulan al beneficiario final que exista un plazo para que las autoridades competentes resguarden la información relativa a esta figura.

Eficiencia y cumplimiento

En el último Informe de Evaluación Mutua de Argentina⁴¹, realizado por el GAFI y el GAFISUD, el 16 de diciembre de 2010, se señaló que el país se encontraba en una “lista gris”, toda vez que tenía un conjunto de incumplimientos normativos en materia de delitos económicos⁴².

Además, detectó que dicho país no establecía en ninguna ley, la obligación de extender la identificación de las personas físicas que sean propietarias o tengan control de una persona jurídica o de una estructura jurídica, ni tampoco obligaciones relacionadas al beneficiario final.

Por tal motivo, en 2011 este país decidió introducir a su legislación la figura del beneficiario final, esto con la reforma de la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246), en la cual se utilizaron las recomendaciones realizadas por el GAFI, buscando la implementación de instrumentos que ampliaran los conceptos referidos a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

40. MARANO María Eugenia, “Los registros públicos de beneficiarios finales en Argentina: avances y retrocesos de un proceso inconcluso”, agosto 2019, p. 31 y 32, consultable en el sitio URL:

41. Informe de evaluación mutua. Consultar en: <https://gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/miembros/argentina/evaluaciones-mutuas>

42. MARANO María Eugenia, “Los registros públicos...”, cit. p. 8.

Sin embargo, a pesar de que Argentina utiliza registros públicos para identificar a los verdaderos dueños; no existe interconexión entre los datos públicos existentes en los sistemas de los diversos organismos nacionales y locales que recaban la información sobre los beneficiarios finales. Por ello, al no lograr que dicha información se centralice, no se puede garantizar que la información que proporcionan sobre el beneficiario final sea válida y certera.⁴³

4. Colombia

Este país es un integrante fundador del GAFISUD, ahora GAFILAT, junto con Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, mediante la firma del Memorando de Entendimiento constitutivo del Grupo el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia.⁴⁴

Ordenamiento legal

- Estatuto Tributario artículos 631-5 y 631-6⁴⁵, en los cuales se establece el concepto de beneficiario final y la forma en que se realizará el registro único de los beneficiarios. Estos artículos fueron modificados a través de la Ley 2155, expedida por el Congreso de Colombia el 14 de septiembre de 2021⁴⁶.
- El Código Civil y Comercial Unificado, en su artículo 1669, establece que los contratos de fideicomiso deben registrarse en el registro público que corresponda.

43. Ibídem, págs. 53 a 55

44. Colombia. La prevención es la primera línea de defensa. Consulta en: <https://gafilat.org/index.php/es/miembros/colombia>

45. El estatuto Tributario, podrá ser consultable en el sitio URL: http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr025.html#631-3

46. La Ley 2155, puede ser consultable en el sitio URL: <https://www.suin-juriscal.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30042272>

- La Resolución 000164 de 2021, expedida el 27 de diciembre de 2021, por el cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), reglamentó los artículos 631-5 y 631-6 del Estatuto Tributario.⁴⁷

Concepto

El artículo 631-5 del Estatuto Tributario, define al **beneficiario final** como la o las personas naturales que finalmente poseen o controlan directa o indirectamente, a un cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a las personas naturales que ejerzan el control efectivo y/o final, directa o indirectamente, sobre una persona jurídica u otra estructura sin personalidad jurídica.

Asimismo, distingue al beneficiario final de la persona jurídica y de la estructura sin personalidad jurídica.

a) Beneficiarios finales de la persona jurídica

- Persona natural que, actuando sólo o en conjunto, sea titular directa o indirectamente del 5% o más del capital o derechos de voto y/o se beneficie en 5% o más de los activos, rendimientos o utilidades de la persona jurídica.
- Persona natural que ejerza control sobre la persona jurídica por un medio distinto al anterior.
- Al no identificarse alguna de las formas anteriores se debe identificar al representante legal, salvo que exista una persona que ostente mayor autoridad con relación a las funciones de gestión y dirección.

.....
47. La Resolución es consultable en el sitio URL: <https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000164%20de%2027-12-2021.pdf#search=00016>

b) Beneficiarios finales de una estructura sin personalidad jurídica:

- Personas naturales que ostenten la calidad de fiduciante(s), fideicomitente(s), constituyente(s), fiduciario(s), comité fiduciario, comité financiero, o posición similar o equivalente a los anteriores, fideicomisario(s), beneficiario(s) o beneficiario(s) condicionado(s); cualquier otra persona que ejerza el control efectivo y/o final, o que tenga derecho a gozar y/o disponer de los activos, beneficios, resultados o utilidades.

Sujetos obligados

Las siguientes personas jurídicas y estructuras sin personalidad jurídica o similares, se encuentran obligadas a identificar, obtener, conservar, suministrar y actualizar en el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB):

- Sociedades y entidades nacionales con o sin ánimo de lucro de conformidad con lo establecido en el artículo 12-1 del Estatuto Tributario, incluyendo aquellas cuyas acciones se encuentren listadas en Bolsas de Valores.
- Establecimientos permanentes de conformidad con lo establecido en el artículo 20-1 del Estatuto Tributario.
- Estructuras sin personalidad jurídica o similares, en cualquiera de los siguientes casos: las creadas o administradas en la República de Colombia; las que se rijan por las normas de la República de Colombia; las que el fiduciario o posición similar o equivalente sea una persona jurídica nacional o persona natural residente fiscal en la República de Colombia.

- Personas jurídicas extranjeras y estructuras sin personalidad o similares, cuyo valor de los activos ubicados en la República de Colombia representen más del 50% del valor total de los activos poseídos por la persona jurídica o estructura sin personalidad jurídica o similar, según sus estados financieros.

Información requerida

Conforme al artículo 8 de la Resolución 000164 de 2021 expedida por la DIAN, los obligados a suministrar la información en el RUB deberán indicar la siguiente información respecto de cada uno de sus beneficiarios finales, según el caso:

- Tipo de documento.
- Número de identificación y país de expedición.
- Número de identificación tributaria – NIT o equivalente funcional y país de expedición.
- Nombres y apellidos.
- Fecha y país de nacimiento.
- País de nacionalidad.
- Ubicación, incluyendo la siguiente información: País de residencia, departamento o estado, ciudad, dirección, código postal, correo electrónico.
- Criterios de determinación del beneficiario final.
- Porcentaje de participación en el capital de la persona jurídica.
- Porcentaje de beneficio en los rendimientos, resultados o utilidades de la persona jurídica, estructura sin personería jurídica o similar.

- Fecha desde la cual tiene la calidad de beneficiario final o existe la condición.
- Fecha desde la cual deja de tener la calidad de beneficiario final o de existir la condición.

Registro de beneficiarios

A través del artículo 631-6 del Estatuto Tributario, se creó el RUB⁴⁸, el cual hará parte integral del Registro Único Tributario (RUT), cuyo funcionamiento y administración está a cargo de la DIAN⁴⁹.

Periodo de conservación de información

Los obligados a suministrar información en el RUB deberán conservar los soportes de la información suministrada y la debida diligencia realizada, por el termino de 5 años, contados a partir del 1° de enero del año siguiente en que se suministra, mantiene, actualiza o elimina la información en el RUB.

En caso de que los sujetos obligados sean liquidados o finalizados, el liquidador deberá conservar la información obtenida en aplicación del principio de debida diligencia durante al menos los 5 años siguientes, contados a partir del 1° de enero de año siguiente a la liquidación.

Eficiencia y cumplimiento

Colombia ha tomado medidas significativas para mejorar la transparencia de las personas jurídicas y de las estructuras jurídicas; pues la información básica debe ser registrada y actualizada anualmente en el Registro Mercantil y bases

.....

48. Registro Único de Beneficiarios Finales.

49. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

de datos de supervisores, es decir, esta información está disponible públicamente; sin embargo, de la evaluación realizada por el GAFILAT a este país del 5 al 22 de junio de 2017, detectó que las autoridades tienen dificultades para obtener información precisa y actualizada sobre el beneficiario final de las estructuras corporativas complejas y determinar si hay propiedad o control extranjero.

Dicha situación, a consideración del GAFILAT, limita la capacidad de este país para responder oportunamente a solicitudes específicas de cooperación internacional sobre la materia, pues no cuenta con procesos para obtener y mantener la información precisa y actualizada sobre el beneficiario final de las entidades, según lo definen los estándares. Por dicho motivo, la organización emitió en noviembre del 2018 el “Informe de Evaluación Mutua de la República de Colombia”⁵⁰, en el que calificó que este país cumple parcialmente con la Recomendación 24 del GAFI.

En el caso de la Recomendación 25, el GAFILAT calificó a Colombia como mayoritariamente cumplida, pues la regulación de servicios fiduciarios es muy amplia y detallada. Además, las autoridades relevantes tienen acceso a información mantenida por las sociedades fiduciarias; sin embargo, hay algunas deficiencias en la información obtenida del beneficiario final y en las sanciones por incumplimientos.

5. República Dominicana

La República Dominicana es signataria de las convenciones internacionales que han sido promovidas para homogeneizar los instrumentos normativos de prevención, detección

50. Informe de evaluación mutua. Consulta en: <https://gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/miembros/colombia/evaluaciones-mutuas-4>

y sanción de los fenómenos delictivos de naturaleza transnacional, como son la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, la Convención de Naciones Unidas contra el Terrorismo de 1999, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000, y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003.⁵¹

En el año 2013 se adhirió al Foro Global para la Transparencia e Intercambio de Información con fines Fiscales, comprometiéndose a cumplir estándares que garanticen la disponibilidad de información de los agentes económicos, de sus actividades y de los beneficiarios finales.

Ordenamiento legal

- La Constitución Política de la República Dominicana dispone en su artículo 260, que es de alta prioridad nacional en materia de seguridad y defensa el combate a las actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses de la República y de sus habitantes.⁵²
- El 7 de junio de 2002 la República Dominicana dictó la Ley Núm. 72-02 sobre el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, tipificando las conductas de lavado de activos con infracciones graves y estableció un sistema de prevención y detección de operaciones de lavado de activos.
- Posteriormente, se emitió la Ley No. 155-17⁵³ contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo,

51. Considerando primero de la Ley 155-17.

52. Constitución Política de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero. Publicada en la Gaceta Oficial No. 10561, del 26 de enero de 2010.

53. LEY NO.155-17. https://www.hacienda.gob.do/marco_legal/ley-no-155-17/

promulgada el 1° de junio de 2017, que sustituyó y derogó la Ley No.72-02.

- Derivado de la ley No. 155-17, se modificó el artículo 50 del Código Tributario, para incluir la obligación de **identificar** al beneficiario final y cualquier modificación al mismo dentro de los deberes formales del contribuyente.
- En el 2017 la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)⁵⁴ emitió el Aviso No. 33-17, mediante el cual informó a los contribuyentes sobre los cambios en los formularios de Declaración Jurada de Impuestos sobre la Renta, agregando anexos que permiten identificar y actualizar al beneficiario final de las sociedades⁵⁵.
- El 16 de noviembre de 2017, se emitió el Reglamento de aplicación de la Ley No. 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo⁵⁶, el cual establece un apartado específico para el beneficiario final y señala la información mínima a solicitar de dicho beneficiario.

Concepto

La Ley No. 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo⁵⁷, introduce el concepto de beneficiario final, definiéndolo como:

“Beneficiario Final: La persona física que ejerce el control efectivo final sobre una persona jurídica o tenga como mínimo el 20% de capital de la persona jurídica, incluyendo a la persona física en beneficio de quien o quienes se lleva a cabo una transacción”.

54. La Dirección General de Impuestos Internos es la institución que se encarga de la administración y/o recaudación de los principales impuestos internos y tasas en la República Dominicana.

55. Beneficiarios Reales. Consulta en: <https://eitird.mem.gob.do/informe-eiti-rd/regulacion-del-sector-extractivo/beneficiarios-reales/#:~:text=La%20ley%20introduce%20el%20concepto,lleva%20a%20cabo%20una%20transacci%C3%B3n%E2%80%9D>.

56. https://sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/prevencionlaft/Decreto_408_17.pdf

57. Artículo 2, 5)

Sujetos obligados

- Las entidades de intermediación financiera.
- Los intermediarios de valores, es decir, las personas que realicen operaciones de corretaje o intermediación de títulos o valores, de inversiones y de ventas a futuro.
- Las personas que intermedien en el canje, cambio de divisas y la remesa de divisas.
- Banco Central de la República Dominicana.
- Personas jurídicas que se encuentren facultadas o licenciadas para fungir como fiduciarias.
- Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito.
- Compañías de Seguros, de Reaseguro y Corredores de Seguro.
- Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión.
- Sociedades titularizadoras.
- Puestos de bolsa e intermediarios de valores.
- Depósito centralizado de valores.
- Emisores de valores de oferta pública que se reserven la colocación primaria.

Información requerida

El Reglamento de aplicación de la Ley No. 155-17 establece la información mínima que se debe solicitar sobre el beneficiario final (art. 39 del Reglamento), sin ser limitativos:

- Número de cédula.
- Documento de identidad o pasaporte vigente.

- Número de identificación tributaria del país de residencia fiscal.
- Nombre completo.
- Domicilio social o sede de actividad.
- Porcentaje de participación accionaria.
- Porcentaje de control efectivo.

La identificación del beneficiario final debe realizarse al momento de inscribirse o actualizar datos del RNC⁵⁸ y si es: **i)** Persona Jurídica, a través de la Declaración Jurada de Impuesto sobre la Renta de Sociedades o **ii)** Instituciones sin fines de lucro, a través de la Declaración Informativa de Impuesto sobre la Renta de Instituciones sin Fines de Lucro.

Conservación de información

Los Sujetos Obligados deben conservar todos los registros necesarios sobre transacciones, medidas de debida diligencia, archivos de cuentas, correspondencia comercial, y los resultados de los análisis realizados, durante al menos **10 años después de finalizada la relación comercial o después de la fecha de la transacción ocasional.**⁵⁹

Autoridad encargada de requerir información

La administración tributaria, al momento de la inscripción o actualización de datos, requerirá que sea identificado el beneficiario final (art. 38 del reglamento).

.....

58. Es el registro que contiene la información relacionada a la identificación, domicilio y actividad económica de las personas físicas y jurídicas inscritas en Impuestos Internos, ya sea para fines tributarios o para registro de patrimonios y otras ocupaciones

59. <https://dgii.gov.do/legislacion/leyesTributarias/Documents/Leyes%20de%20Instituciones%20y%20Fondos%20de%20Terceros/155-17.pdf>

Registro de beneficiario

La Federación de Cámaras de Comercio en República Dominicana (FEDOCAMARAS) y la DGII firmaron un Acuerdo de Cooperación Administrativa, mediante el cual el Registro Mercantil otorga acceso a la base de datos de la DGII, con el objetivo de identificar a aquellas sociedades que han obtenido su certificado de Registro Mercantil, pero no han sido registradas ante la DGII, mismo que se ha utilizado para compartir los datos relativos al registro o modificación de los datos del beneficiario final de las sociedades registradas ante una de las instituciones.⁶⁰

Eficacia y cumplimiento

La República Dominicana fue evaluada en 2018 por el GAFILAT⁶¹, respecto al nivel de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI y el nivel de efectividad del sistema antilavado, concluyendo que el marco legislativo referente al beneficiario final **“está ampliamente en línea con los estándares internacionales”**, otorgando al país una calificación de **“Mayoritariamente Cumplida”**.⁶²

De igual manera, la evaluación del GAFI destacó que “la República Dominicana cuenta con registros mercantiles de carácter público (en su mayor parte informatizados), y existen mecanismos legales que prevén la obligación de identificar a los beneficiarios finales e informar a la autoridad” sobre cualquier cambio en la información societaria.

60. <https://eitird.mem.gob.do/informe-eiti-rd/regulacion-del-sector-extractivo/beneficiarios-reales/>

61. Informe de Evaluación Mutua. <https://gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/miembros/republica-dominicana/evaluaciones-mtuas-15>

62. <https://eitird.mem.gob.do/informe-eiti-rd/regulacion-del-sector-extractivo/beneficiarios-reales/>

Asimismo, el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria, le otorgó una calificación general de **“Ampliamente Cumplidora”** con el estándar internacional de transparencia e intercambio de información. Dentro de los elementos evaluados estuvo el elemento A.1, sobre la identificación del beneficiario legal y beneficiario final en toda la cadena societaria.⁶³

La Comisión Nacional identificó que, aun cuando el país cuenta con definiciones acorde a las mejores prácticas internacionales en esta área, sigue siendo necesario un instrumento normativo que faculte la **divulgación de la información sobre los beneficiarios reales** de las empresas extractivas que operan en el país, por lo que continúan los trabajos de la Hoja de Ruta.

.....
63. Evaluación realizada a principios del año 2019 sobre los mecanismos para el intercambio de información a requerimiento

Cuadro comparativo

Concepto	EUA	España
Nombre	<i>UBO</i>	<i>Titulares reales</i>
Registro	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>
Autoridad	<i>Red de ejecución de delitos financieros</i>	<i>SEPBLAC</i>
Temporalidad de conservación de información	<i>5 años</i>	<i>10 años</i>
Eficacia	<i>R. 24 No cumple R. 25 parcialmente cumplida</i>	<i>Cumple en gran medida ambas recomendaciones</i>

Argentina	Colombia	Rep. Dominicana
<i>Beneficiario final</i>	<i>Beneficiario final</i>	<i>Beneficiario final</i>
<i>Sí (sólo en la ciudad de Buenos Aires)</i>	<i>Sí</i>	<i>Sí</i>
<i>Unidad De Información Financiera</i>	<i>Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales</i>	<i>Administración Tributaria</i>
<i>No indica</i>	<i>5 años</i>	<i>10 años</i>
<i>No cumple</i>	<i>R.24 cumple parcialmente R. 25 Mayoritariamente cumplida</i>	<i>Cumple ampliamente ambas recomendaciones</i>

V. ¿Qué es el beneficiario controlador?

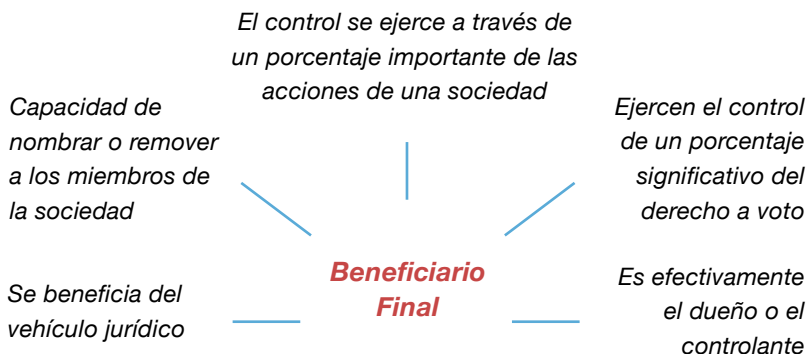
Como señalamos anteriormente, de acuerdo con el GAFI, el beneficiario final es la persona natural que finalmente posee o controla a un cliente y/o la persona natural, en cuyo nombre se realiza una transacción e incluye también a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona moral u otra estructura jurídica.

En otras palabras, los beneficiarios finales son las personas físicas que son los verdaderos dueños, controlantes o quienes se benefician económicamente de una sociedad mercantil, un fideicomiso, una fundación, etc.

Como hemos visto diversos países en cumplimiento a las recomendaciones del GAFI, G-20 y el Foro Global de la OCDE, han introducido la figura denominándola beneficiario final, titular real o, como en el caso de México, beneficiario controlador.

A continuación, a mayor detalle se señalarán características del beneficiario final, así como la identificación de la figura en personas o estructuras jurídicas de acuerdo con las interpretaciones y guía emitida por el GAFI.

Características de beneficiario final



Identificación de beneficiario en personas jurídicas

1. Se obtiene y verifica (con acciones, voto, propiedad u otro derecho) la identidad de las personas naturales, que al final son las que tienen una participación mayoritaria que les permite el control de una persona jurídica.
2. Si existe duda acerca de si la persona con la participación mayoritaria en la titularidad es el beneficiario final o ninguna persona natural ejerce control vía participación de la titularidad, entonces debe establecerse la identidad de una persona natural que ejerce el control de la persona jurídica a través de otros medios.
3. Cuando no se pueda identificar ninguna persona natural, una institución financiera o APNFD⁶⁴, debe identificar y tomar medidas razonables para verificar la identidad de la persona natural relevante que ocupa el puesto de funcionario administrativo superior.

Estos procedimientos de identificación están contenidos en la Nota Interpretativa a la Recomendación 10 del GAFI.

Identificación de beneficiario en estructuras jurídicas

En lo que respecta a la identificación de los beneficiarios finales de un fideicomiso, más que realizarla con base en las pruebas en cascada (como para las personas jurídicas), las instituciones financieras deben identificar a todas las partes del fideicomiso, incluyendo⁶⁵:

- Fiduciante o fideicomitente.

64. Actividades y Profesiones No Financieras Designadas.

65. Manual Sobre beneficiarios finales. Consulta en: https://www.dian.gov.co/Documents/Intercambio_de_Informacion_Internacional/Manual_sobre_beneficiario_efectivo_final_o_real.pdf

- Fiduciario(s).
- Protector(es) (si existen).⁶⁶
- Beneficiarios o clases de beneficiarios.
- Cualquier otra persona que ejerza el control efectivo sobre el fideicomiso.

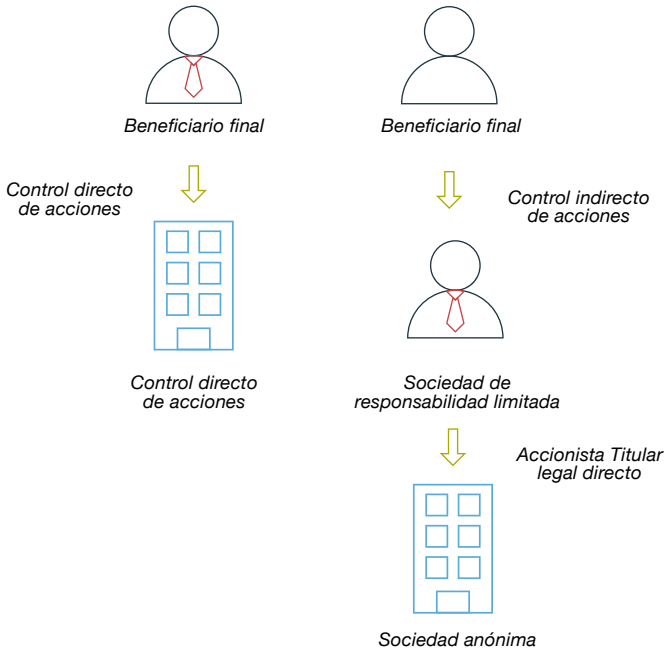
Factores que dificultan la identificación del beneficiario

1. El anonimato permite que muchas actividades ilegales, tales como evasión fiscal, corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tengan lugar de manera oculta y escapando de las autoridades que velan por el cumplimiento de la ley.
2. Otro factor que dificulta la identificación del beneficiario en cuestión es el **uso de accionistas nominales**, es decir, personas que **prestan su nombre** para figurar como accionistas o propietarias en nombre de otro individuo (cuya identidad permanece oculta), está prohibido en algunos países, pero permitido en otros. En algunos casos, un accionista nominal podría estar ocultando al beneficiario final.
3. Para hacer aún más difícil la identificación del beneficiario final, la cadena de propiedad suele expandirse **geográficamente**, estableciendo cada capa en un país diferente. La identificación del beneficiario final es independiente de la nacionalidad de éste.

Los beneficiarios finales pueden tener el control de manera directa o indirecta, por lo que a continuación, se presenta

.....
 66. En ciertos fideicomisos, por ejemplo, los discrecionales; puede existir la figura del “protector”, generalmente nombrado por el fiduciante, para controlar lo que hace el fiduciario.

el siguiente ejemplo para señalar la diferencia entre un beneficiario que tiene el control de manera directa y otro de manera indirecta a través de otra persona moral.



Según las directrices del GAFI⁶⁷, la información del beneficiario final suele ocultarse haciendo uso de:

- Empresas ficticias, sobre todo cuando los propietarios extranjeros están distribuidos por distintas jurisdicciones.
- Estructuras complejas de propiedad y control.
- Acciones al portador y certificados de acciones al portador.
- Uso no restringido de personas jurídicas en calidad de directores.

67. Ocultación de la identidad de los beneficiarios finales. Consulta en: <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/SPANISH-FATF-Egmont-Concealment-Beneficial-Ownership.pdf>

- Mandatos oficiales de representación de accionistas y directores, en los que no se divulga la identidad de la persona representada.
- Mandatos de representación de accionistas y directores, otorgados de forma oficiosa, por ejemplo, a socios cercanos o familiares.
- Fideicomisos y otros arreglos jurídicos que permiten separar las figuras del propietario legal y el beneficiario final de los bienes.
- Intermediarios que intervienen en la constitución de personas jurídicas, como los intermediarios profesionales.

VI. Beneficiario controlador en el Derecho Mexicano

a) Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito

Derivado de los compromisos con el GAFI y sus integrantes para implementar sus recomendaciones y, por consiguiente, de la evaluación mutua que se realizó a México, consistente en una revisión de los sistemas y mecanismos que se han creado en nuestro país como miembro del GAFI, y de la respuesta de México a la implementación efectiva de las 40 Recomendaciones; el 24 de febrero de 2017, se publicó en el DOF la Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, mediante la cual se incorporó la definición del propietario real.

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

“Segunda. - Para los efectos de las presentes Disposiciones, se entenderá por:

...

XIV. Propietario Real, aquella persona que por medio de otra obtiene los beneficios derivados de una cuenta, contrato u Operación y es el verdadero dueño de los recursos.

También comprende a aquellas personas que ejerzan el control sobre una persona moral, así como en su caso, los fideicomisarios de un fideicomiso, el mandante de un mandato o el comitente de una comisión;

...”

Dicha figura no deriva de las Recomendaciones 24 y 25, que hablan del beneficiario final, sino que se establece conforme a la Recomendación 10, respecto de la política de identificación del cliente, persona moral, con independencia de la calificación del riesgo que haga la institución de crédito de éste, a fin de que los sujetos obligados conozcan sus estructuras accionarias y corporativas, así como precisar los mecanismos para recabar los datos de los propietarios reales. Con el objetivo de que las instituciones de crédito cuenten con más información que les permita realizar una mejor evaluación de los riesgos a los que están expuestas en virtud de sus relaciones comerciales.

b) El beneficiario controlador en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

De la evaluación por parte del GAFI, se observaron incumplimientos de nuestro país respecto a sus 40 recomendaciones en materia de prevención de lavado de dinero y sus 9 recomendaciones especiales para combatir el financiamiento al terrorismo. A partir de ello, México consideró necesario que la política de prevención de lavado de dinero se articule de manera global y **evolucione a semejanza de los modelos internacionales**, tanto para América del Norte como para Latinoamérica y Europa, que han adoptado las mejores prácticas internacionales, a efecto de incluir a todos los sectores susceptibles de recibir o realizar operaciones con fondos de procedencia ilícita.

Por lo anterior, atendiendo el compromiso suscrito en materia de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo, el 17 de octubre de 2012, México publicó la *Ley PRIORPI*, la cual en su artículo 3° fracción III, define la figura de beneficiario controlador. De acuerdo con la exposición de

motivos⁶⁸, dicha introducción tiene por finalidad dotar de un marco jurídico que dé bases suficientes a las autoridades, al sistema financiero y demás sujetos obligados, para avanzar en la prevención y combate al lavado de dinero. A continuación, se establece lo dispuesto por la Ley PRIORPI respecto a la figura del beneficiario controlador.

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
(...)

III. Beneficiario Controlador, a la persona o grupo de personas que:

a) Por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de éstos y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio, o

b) Ejerce el control de aquella persona moral que, en su carácter de cliente o usuario, lleve a cabo actos u operaciones con quien realice Actividades Vulnerables, así como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos.

Se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona moral cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o de cualquier otro acto, puede:

68. <https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=PIOrqrSvLTzAsqvzQ7fUkz4CDgpulVHAT0x/cmnS+a4vGnW5dCrRA2Q1Uzmb2ldRVW+V9n0v/NtjXunpZn4N+Q==>

i) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes;

ii) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social, o

*iii) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la misma.
(...)*

Cabe precisar que la Ley PRIORPI no es una Ley de la materia fiscal, por lo que aún fue necesario modificar las disposiciones fiscales para cumplir con los estándares internacionales en esta materia.

c) El beneficiario controlador en el Derecho Tributario

El 8 de septiembre de 2021, mediante la Iniciativa que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos, el Ejecutivo Federal propuso al H. Congreso de la Unión la introducción de la figura del beneficiario controlador en materia fiscal (ver apéndice 1), de acuerdo con los siguiente:

- Derivado de los acuerdos del Foro Global, se introdujo el requisito de que la información del beneficiario controlador estuviera disponible para efectos del Estándar de

Intercambio de Información Previa de Petición, respecto de personas, estructuras jurídicas relevantes y cuentas bancarias.

- El GAFI y el Foro Global evalúan a los países sobre que la información de los beneficiarios controladores esté disponible, sea accesible, confiable y actualizada, pues es relevante para el combate a la evasión fiscal, el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos.
- Las autoridades tributarias deben tener pleno acceso a la identidad de los beneficiarios controladores de todas las personas jurídicas, para combatir transacciones y operaciones complejas que permiten utilizar dinero de origen ilícito con una apariencia de licitud.
- Debido a que la información de los beneficiarios controladores es un elemento esencial en los estándares de transparencia fiscal internacional y para el intercambio de información previa petición; contar con un marco jurídico que garantice el cumplimiento de los estándares mínimos de transparencia, es un compromiso de los gobiernos, como es el caso de México.
- El concepto de beneficiario controlador del GAFI y del Foro Global se define como la persona o grupos de personas físicas que efectivamente controlan o se benefician económicamente de una persona jurídica o figura jurídica. El control o el beneficio económico derivan de la participación accionaria o de la capacidad para nombrar o remover a los miembros directivos de la entidad.
- La Iniciativa de reforma consistió en establecer la obligación de las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos, así como las partes contratantes o

integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, de obtener y conservar, como parte de su contabilidad y a proporcionar al SAT la información de los beneficiarios controladores, en forma fidedigna, completa y actualizada.

- Adicional a los estándares de transparencia, la reforma contempla sanciones disuasorias ante el incumplimiento de las obligaciones en materia de beneficiario controlador.
- La reforma implica que a los evasores y a otros infractores de la ley, les resulte más difícil ocultar sus actividades delictivas y los fondos ilícitos en jurisdicciones que aplican la regulación de beneficiario controlador.

Derivado de lo anterior, el 12 de noviembre de 2021, se publicó en el DOF la reforma al CFF, en el cual se adicionaron los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter, 32-B Quinquies, 84-M y 84-N, con la finalidad de que la administración tributaria cumpla los estándares internacionales que exigen niveles de transparencia mínimos con relación a los beneficiarios controladores de sociedades mercantiles, fideicomisos y otras figuras jurídicas con fines fiscales.

Con el fin de entender la figura de beneficiario controlador y explicar a detalle quiénes son los sujetos obligados, es necesario comprender quién es la persona moral, el fideicomiso y qué debe entenderse por otras figuras jurídicas.

¿Qué es una persona moral?

Para el GAFI, las personas morales o jurídicas son las entidades que pueden establecer una relación permanente como cliente con una institución financiera o tener propiedades de otra forma. Esto puede incluir sociedades mercantiles, órganos corporativos, fundaciones, sociedades o asociaciones y otras entidades pertinentemente similares.

En nuestro país, el Poder Judicial de la Federación (PJF) las define como aquellas organizaciones creadas a partir de la agrupación voluntaria de una pluralidad de personas físicas, con una finalidad común, identidad propia y diferenciada, que trasciende a la de los individuos que la integran, dotada de órganos que expresan su voluntad independiente de la de sus miembros y de un patrimonio propio, separado del de sus integrantes.⁶⁹

En materia civil, el Código Civil Federal (CCF), es el ordenamiento jurídico que le atribuye personalidad a la persona moral y reconoce su capacidad para actuar como sujeto independiente de derechos y obligaciones; en su artículo 25 del Libro Primero, establece el listado de quiénes son consideradas personas morales, el cual se transcribe a continuación:

Artículo 25.- Son personas morales:

- I. La Nación, los Estados y los Municipios;*
- II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley;*
- III. Las sociedades civiles o mercantiles;*
- IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal;*
- V. Las sociedades cooperativas y mutualistas;*
- VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley.*
- VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo 2736.*

69. Tesis 24350, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, L XIX, abril de 2013, Tomo 3, p. 1851.

Asimismo, dentro del apartado dedicado a las personas morales, se establece que pueden ejercitar todos los derechos necesarios para realizar el objeto de su institución, las cuales se regirán por las leyes correspondientes, por su escritura constitutiva y sus estatutos. Por lo anterior, tenemos que las personas morales comúnmente conocidas como entes jurídicos o colectivos, son sujetos de derechos y obligaciones, con personalidad jurídica distinta a la de sus integrantes.

Dentro del mismo CCF encontramos la definición de las sociedades civiles⁷⁰ y la asociación civil⁷¹. La primera se presenta, cuando los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial; mientras que la segunda se da cuando varios individuos convienen en reunirse, de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico.

Las sociedades mercantiles son agrupaciones de personas ligadas por un interés económico particular. Este tipo de sociedades realizan actos de comercio y persiguen una especulación comercial a diferencia de las sociedades civiles. Las sociedades mercantiles se encuentran reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la cual se reconoce a las siguientes especies: **i)** Sociedad en nombre colectivo; **ii)** Sociedad en comandita simple; **iii)** Sociedad de responsabilidad limitada; **iv)** Sociedad anónima; **v)** Sociedad en comandita por acciones; **vi)** Sociedad cooperativa, y **vii)** Sociedad por acciones simplificada.

70. Artículo 2688 del Código Civil Federal.

71. Artículo 2670 del Código Civil Federal.

El SAT considera a la persona moral, como el conjunto de personas físicas que se unen para la realización de un fin colectivo, aun cuando también pueden estar conformadas por personas morales. Son entes creados por el derecho, no tienen una realidad material o corporal (no se pueden tocar como tal, como en el caso de una persona física); sin embargo, la ley les otorga capacidad jurídica para tener derechos y obligaciones⁷²

Asimismo, el artículo 7 de la Ley del ISR establece que se considerará persona moral, entre otras, a las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles y la asociación en participación cuando a través de ella se realicen actividades empresariales en México.

¿Qué es un fideicomiso?

Es un contrato mediante el cual una persona física o moral, denominada **fideicomitente** transmite la titularidad de uno o más bienes o derechos a una institución **fiduciaria**, para que ésta los destine a la realización de ciertas finalidades, para beneficio de la misma persona que constituyó el fideicomiso o de un tercero.⁷³

De lo anterior, podemos identificar a los siguientes entes involucrados:

- **Fiduciaria:** Es la Institución encargada de la administración del Fideicomiso.

72. <https://www.sat.gob.mx/consulta/09788/emprendedor,-conoce-los-regimenes-fiscales-de-las-personas-fisicas#:~:text=Persona%20moral%3A%20Es%20el%20conjunto,jur%C3%ADdica%20para%20tener%20derechos%20y>

73. Artículo 381 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

- **Fideicomitente:** Es la persona física o moral que constituye el fideicomiso al aportar los bienes o derechos necesarios para la realización de los fines deseados.⁷⁴
- **Fideicomisario:** Es la persona física o moral designada por el fideicomitente para recibir el provecho que el fideicomiso implica.⁷⁵

La constitución del fideicomiso debe constar siempre por escrito. Cuando el fideicomiso recaiga en bienes inmuebles, deberá inscribirse en la **Sección de la Propiedad del Registro Público** del lugar en que los bienes estén ubicados. Cuando recaiga en bienes muebles, surtirá efectos contra tercero, desde la fecha de su inscripción en la **Sección Única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio**.

Existen fideicomisos con diversos fines, como son: los que realizan actividades empresariales; de garantía; de inversión; testamentarios; de previsión social; fideicomisos públicos; fideicomisos inmobiliarios o algún otro fideicomiso.

Los fideicomisos de administración se definen como aquellos en virtud de los cuales se transmiten al fiduciario determinados bienes o derechos, para que el fiduciario proceda a efectuar las operaciones de guarda, conservación o cobro de productos de los bienes fideicomitados que le encomiende el fideicomitente, entregando los productos o beneficios al fideicomisario⁷⁶.

74. Ídem.

75. Artículo 382 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

76. Villagordoa Lozano, Manuel, El fideicomiso, teoría y práctica, 2a. ed., México, Asociación de Banqueros de México, 1973, p. 118.

Bienes objeto del fideicomiso

Pueden ser objeto de este tipo de fideicomiso cualesquiera bienes, muebles e inmuebles; derechos reales o personales, incluyendo todo tipo de valores, créditos, títulos, dinero en efectivo, etcétera, con excepción de aquellos derechos cuyo goce o ejercicio sea estrictamente personal conforme a la ley.

Las actividades fundamentales que realiza el fiduciario son la guarda y conservación de los bienes que integran el patrimonio fideicomitado, el cobro de los productos o rendimientos que generen y su transmisión al fideicomisario o, en su caso, a algún tercero. Además, es posible que dentro de los actos de administración que deba realizar el fiduciario se encuentren la inversión de los bienes fideicomitados, mediante la adquisición de bienes de diversa naturaleza, en cuyo caso es frecuente que sea el acto constitutivo del fideicomiso, en donde se señalen los bienes que podrá adquirir el fiduciario.⁷⁷

Ejemplos de fideicomisos de administración

- Fideicomisos en que se afecten recursos relacionados con primas de antigüedad, fondos individuales de pensiones, rentas vitalicias, dividendos y sumas aseguradas, o con la administración de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que establecen las leyes sobre seguridad social y de primas de antigüedad (art. 34 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros).
- Fideicomisos que tengan por objeto el otorgamiento de créditos y que indudablemente son fideicomisos de administración (art. 106, fracción XIX, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Instituciones de Crédito).

.....
77. Consulta en: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/167/6.pdf>

- Fideicomisos a través de los cuales las instituciones de crédito, como fiduciarias, pueden adquirir derechos sobre bienes inmuebles ubicados dentro de la zona restringida, cuando el objeto del fideicomiso sea permitir la utilización y el aprovechamiento de tales bienes sin constituir derechos reales sobre ellos, y los fideicomisarios sean sociedades mexicanas sin cláusula de exclusión de extranjeros (artículos 11 a 14 de la Ley de Inversión Extranjera).

¿Los fideicomisos de administración se encuentran obligados a llevar contabilidad electrónica?

Las disposiciones fiscales consideran únicamente al fideicomiso de actividades empresariales como sujetos obligados, no así a los fideicomisos de administración, por lo que, al no ser contribuyentes, no tienen las obligaciones de inscribirse ante el RFC, presentar declaraciones, emitir CFDI ni llevar contabilidad electrónica.

Si bien los fideicomisos de administración no están obligados a llevar contabilidad; ello no implica que no deban cumplir con la obligación establecida en el artículo 32-B Ter del CFF, de obtener y conservar como parte de la contabilidad, la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores, así como con la regla 2.8.1.21 de la RMF vigente para 2022, la cual señala los procedimientos de control interno que se considerarán parte de la contabilidad que el SAT podrá requerir.

¿Qué debemos entender por otras figuras jurídicas?

El artículo 32-B Quáter del CFF, define al beneficiario controlador como la persona física o grupo de personas físicas que directamente o por medio de otra u otras o de cualquier

acto jurídico, obtiene u obtienen el beneficio derivado de su participación en **cualquier otra figura jurídica**.

Asimismo, el último párrafo del artículo antes citado refiere que, para la interpretación del contenido de dicho precepto, serán aplicables las Recomendaciones emitidas por el GAFI y por el Foro Global organizado por la OCDE, siempre que su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia de las disposiciones fiscales mexicanas.

Lo anterior implica que, al referirse el legislador a la frase “cualquier otra figura jurídica” y “cualquier otro acto jurídico”, no establece qué debe entenderse por estas figuras o actos jurídicos; lo cual tampoco ha sido esclarecido por la autoridad fiscal, pues a la fecha no ha emitido un criterio o definición al respecto; motivo por el cual es recomendable que al momento de que los contribuyentes tengan duda de que se deberá entender por dichos conceptos, se remitan a las recomendaciones 24 y 25 del GAFI, en específico a sus notas interpretativas, las cuales esclarecen como los países deberán de identificar a otras personas y estructuras jurídicas:

*NOTA INTERPRETATIVA DE LA RECOMENDACIÓN 24
(TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIO FINAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS)*

OTRAS PERSONAS JURÍDICAS

...

17. En cuanto a otros tipos de personas jurídicas, los países deben tomar en consideración las diferentes formas y estructuras de esas otras personas jurídicas, así como los niveles de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo asociados a cada tipo de persona jurídica, con la finalidad de alcanzar niveles apropiados de transparencia. Como mínimo, los países deben asegurar

*el asentamiento de tipos similares de información básica y que ésta sea precisa y se mantenga actualizada por estas personas jurídicas, y que las autoridades competentes tengan acceso, oportunamente, a dicha información. Los países deben revisar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo asociados a estas otras personas jurídicas, y, sobre la base del nivel de riesgo, determinar las medidas que se deben tomar para asegurar que las autoridades competentes tengan acceso oportuno a información adecuada, precisa y actualizada sobre el beneficiario final de tales personas jurídicas.*⁷⁸

NOTA INTERPRETATIVA DE LA RECOMENDACIÓN 25 (TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIO FINAL DE LAS ESTRUCTURAS JURÍDICAS)

Otras estructuras jurídicas

...

9. *En cuanto a otros tipos de estructuras jurídicas con una estructura o función semejante, los países deben tomar **medidas similares** a las que se requieren para los fideicomisos, con la finalidad de alcanzar los mismos niveles de transparencia. Como mínimo, los países deben asegurar que una información similar a la especificada con anterioridad con respecto a los fideicomisos se registre y se mantenga precisa y actualizada, y que las autoridades competentes tengan acceso oportuno a esa información.*⁷⁹

78. Recomendación 24. <https://www.cfatf-gafic.org/index.php/es/documentos/gafi40-recomendaciones/430-fatf-recomendacion-24-transparencia-y-beneficiario-final-de-las-personas-juridicas>
79. Recomendación 25. <https://www.cfatf-gafic.org/es/documentos/gafi40-recomendaciones/431-fatf-recomendacion-25-transparencia-y-beneficiario-final-de-otras-estructuras-juridicas>

Glosario

Estructuras jurídicas se refiere a los fideicomisos expresos u otras estructuras jurídicas similares. Entre los ejemplos de otras estructuras similares (a los efectos del ALA/CFT) están: fiducie, treuhand y el fideicomiso.

...

Fideicomiso expreso se refiere a un fideicomiso creado claramente por el fideicomitente, usualmente en la forma de un documento, ej.: una escritura de fideicomiso. Estos contrastan con los fideicomisos que se hacen realidad mediante la operación de la ley y que no son el resultado de la intención o decisión clara de un fideicomitente de crear un fideicomiso o una estructura jurídica similar (ej.: fideicomiso constructivo).⁸⁰

Por lo antes expuesto, podemos señalar que, en principio, las recomendaciones hablan de personas y estructuras jurídicas, refiriéndose, en el último caso, a los fideicomisos expresos; sin embargo, cuando mencionan otras estructuras y otras personas jurídicas, se refieren a modelos similares que no encuadran en el fideicomiso, lo mismo aplica para las personas jurídicas.

Ahora bien, de la definición establecida en el CFF por el legislador, señala a las personas morales, fideicomisos y otras figuras jurídicas, por lo que de una interpretación en conjunto podría decirse que otras figuras jurídicas pueden englobar tanto a otras personas morales similares u otros fideicomisos similares, que no tienen precisamente las mismas características para denominarles de tal manera, pero

80. <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Spanish.pdf>

que respecto a su estructura podrían ocultar al beneficiario controlador. Se sugiere a los sujetos obligados y terceros que al interpretar “otras figuras jurídicas” se ciñan a las notas interpretativas de las recomendaciones del GAFI, es decir, personas y estructuras jurídicas con características similares.

¿Si no tengo la obligación de llevar contabilidad, debo obtener y conservar la información relativa al beneficiario controlador?

Si bien es cierto que existen contribuyentes que, conforme a la Ley, no se encuentran obligados a llevar contabilidad, también lo es que deberán conservar en su domicilio y a disposición de las autoridades, toda documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, ello de conformidad con el artículo 30, primer párrafo del CFF.

En atención a ello, se recomienda a los contribuyentes que, aun cuando no se encuentren obligados a llevar contabilidad, conserven la información relativa al beneficiario controlador, para que, en caso de que la autoridad solicite la misma, a través de requerimiento o de facultades de comprobación, no se incumpla con las obligaciones fiscales impuestas en materia del beneficiario controlador y se evite la imposición de infracciones.

Una vez revisados los conceptos anteriores, podemos pasar a explicar qué es el beneficiario controlador, conforme a las disposiciones legales mexicanas.

¿Qué se debe entender por beneficiario controlador?

De acuerdo con el **artículo 32-B Quáter del CFF**, el **beneficiario controlador** es la persona física o grupo de personas físicas que directamente o por medio de otra

u otras o de cualquier acto jurídico, obtiene u obtienen el beneficio derivado de su participación en una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, así como de cualquier otro acto jurídico, o es quien o quienes en última instancia ejerce o ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio o en cuyo nombre se realiza una transacción, aun cuando lo haga o hagan de forma contingente⁸¹.

Asimismo, el **beneficiario controlador** es la persona física o grupo de personas físicas que directa, indirectamente o de forma contingente, ejercen el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.

¿Cuándo se entiende que se ejerce el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica?

Se entiende que una persona física o grupo de personas físicas ejerce el control cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o por cualquier otro acto jurídico, puede o pueden:

- Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes.
- Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del 15% del capital social o bien.
- Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.

81. Que puede suceder o no suceder. Consulta en: <https://www.rae.es/drae2001/contingente>

En el caso de fideicomisos, ¿quiénes serán considerados como beneficiarios controladores?

Tratándose de fideicomisos, se consideran beneficiarios controladores a los:

- Fideicomitente(s).
- Fiduciario.
- Fideicomisario(s).
- Cualquier otra persona involucrada y que ejerza el control efectivo en el contrato, aunque sea de forma contingente.

¿Cuáles son los criterios para identificar la condición de beneficiario controlador?

El SAT, mediante reglas de carácter general, señaló los criterios para la determinación de la condición de beneficiario controlador de las personas morales, cuya aplicación debe ser de forma sucesiva, como se muestra a continuación:

<p>Criterio de determinación para identificar al beneficiario controlador</p>	<p>Supuesto a aplicar</p>
<p>Primer criterio Aplicación de la Fracción I del artículo 32-B Quáter del CFF.</p>	<p>Fracción I del artículo 32-B Quáter del CFF Directamente o por medio de otra u otras o de cualquier acto jurídico, obtiene u obtienen el beneficio derivado de su participación en una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, así como de cualquier otro acto jurídico, o es quien o quienes en última instancia ejerce o ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio o en cuyo nombre se realiza una transacción, aun y cuando lo haga o hagan de forma contingente.</p>
<p>Segundo criterio Si del primer criterio no se identifica al beneficiario controlador se aplicará la fracción II del artículo 32-B Quáter del CFF.</p>	<p>Fracción II del artículo 32-B Quáter del CFF Directa, indirectamente o de forma contingente, ejerzan el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.</p> <p>Se entiende que una persona física o grupo de personas físicas ejerce el control cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o por cualquier otro acto jurídico, puede o pueden:</p>

	<p><i>a) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes.</i></p> <p><i>b) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del 15% del capital social o bien.</i></p> <p><i>c) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.</i></p>
<p>Tercer criterio</p> <p><i>Si no se identifica al beneficiario controlador se aplica el tercer párrafo de la regla 2.8.1.20. de la RMF vigente para 2022.</i></p>	<p>Regla 2.8.1.20. de la RMF vigente en 2022</p> <p><i>Se considerará como beneficiario controlador a la persona física que ocupe el cargo de administrador único de la persona moral o equivalente.</i></p> <p><i>En caso de contar con un consejo de administración u órgano equivalente, cada miembro de dicho consejo se considerará como beneficiario controlador.</i></p>

¿Quiénes son responsables de identificar al beneficiario controlador?

Conforme al artículo 32-B Ter, primer párrafo del CFF, los sujetos obligados a obtener y conservar en contabilidad, así como proporcionar al SAT la información y documentación relacionada con el beneficiario controlador, son los siguientes:

- Personas morales.
- Fiduciarias.
- Fideicomitentes.
- Fideicomisarios.
- Partes contratantes o integrantes de otras figuras jurídicas.

El artículo 32-B Ter, tercer párrafo del CFF, establece que se consideran terceros que intervienen en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos:

- Notarios públicos.
- Corredores públicos.
- Cualquier persona que intervenga en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de dichas personas o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica.

Tratándose de entidades financieras y los integrantes del sistema financiero, la autoridad podrá requerir la información relativa a las cuentas financieras.

Obligaciones derivadas de la figura del beneficiario controlador

Respecto a las obligaciones fiscales que tendrán los sujetos obligados o los terceros, es importante diferenciarlas para no generar confusión, ya que dichas obligaciones fueron establecidas por el legislador en el CFF y aunque se establecieron cláusulas habilitantes para la emisión de reglas de carácter general, no debemos perder de vista que éstas sólo pueden establecer el cómo, cuándo y dónde, no así cargas fiscales u obligaciones adicionales.

a) Obligaciones de los sujetos obligados

Las obligaciones que tendrán las personas morales, las partes que integran el fideicomiso, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, serán las siguientes:

Disposiciones fiscales	Obligación
Artículo 32-B Ter, primer párrafo del CFF	<ul style="list-style-type: none">• <i>Obtener y conservar como parte de su contabilidad, la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores.</i>• <i>Proporcionar la información al SAT, en caso de requerirla.</i>
Artículo 32-B Quinquies, primer párrafo del CFF	<ul style="list-style-type: none">• <i>Mantener actualizada la información referente a los beneficiarios controladores.</i>• <i>En el caso de que exista modificación en la identidad o participación de los beneficiarios controladores, deberán actualizar dicha información dentro de los</i>

	<p>15 días naturales siguientes a la fecha en que se haya realizado la modificación.</p>
<p>Regla 2.8.1.21. primer párrafo de la RMF</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Implementar procedimientos de control interno debidamente documentados, los cuales deben ser razonables y necesarios para obtener y conservar la información, sobre la identificación de los beneficiarios controladores. • Los procedimientos de control interno se considerarán parte de la contabilidad que el SAT podrá requerir. • Conservar la información del beneficiario controlador, de la cadena de titularidad⁸¹ y de la cadena de control⁸², la documentación que sirva de sustento para ello, así como la documentación comprobatoria obtenida a través de los procedimientos de control interno, durante el plazo establecido en el artículo 30 del CFF. • Proporcionar, permitir el acceso oportuno de las autoridades fiscales y otorgarles todas las facilidades para que acceda a la información, registros, datos y documentos relativos a los beneficiarios controladores.

.....

81. La Regla 2.8.1.20 señala que cadena de titularidad, es el supuesto en que se ostente la propiedad indirecta, a través de otras personas morales.

82. La Regla 2.8.1.20 señala que cadena de control, es el supuesto en que se ostente el control indirectamente, a través de otras personas morales, fideicomisos o cualquier otra figura jurídica.

b) Obligación de los terceros

Las obligaciones fiscales a las cuales se encuentran sujetos son:

Disposiciones fiscales	Obligación
Artículo 32-B Ter, tercer párrafo del CFF	<ul style="list-style-type: none">• <i>Obtener la información para identificar a los beneficiarios controladores.</i>• <i>Proporcionar la información al SAT en caso de requerirla.</i>
Regla 2.8.1.21. primer párrafo de la RMF	<ul style="list-style-type: none">• <i>Implementar procedimientos de control interno debidamente documentados, los cuales deben ser razonables y necesarios.</i>• <i>Los procedimientos de control interno se considerarán parte de la contabilidad que el SAT podrá requerir.</i>
Regla 2.8.1.23. fracción V de la RMF	<ul style="list-style-type: none">• <i>En caso de que con su intervención la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica efectúe modificaciones al capital fijo o capital variable o al patrimonio del fideicomiso o figura jurídica, según corresponda, la información soporte del monto y de los actos o contratos necesarios para ello.</i>

Si soy notario público o corredor público, ¿tengo la obligación de conservar la información del beneficiario controlador como parte de mi contabilidad?

En principio, el legislador estableció la obligación de mantener la información como parte de la contabilidad, únicamente para los sujetos obligados (personas morales, fideicomisos y otras figuras jurídicas). Sin embargo, se podría prestar a confusión, debido a que la autoridad fiscal, mediante reglas de carácter general señaló que los procedimientos de control para conservar la información o documentación, debe formar parte de la contabilidad.

A consideración de **PRODECON** la obligación de llevar contabilidad electrónica para los fedatarios públicos está contenida en el propio CFF, tal y como se encuentran establecidas para las personas morales, fideicomisos u otras figuras jurídicas.

Conforme al segundo párrafo del artículo 30 del CFF, los notarios públicos y corredores públicos deberán cumplir con la obligación de conservar la documentación de beneficiario controlador, a fin de esta en posibilidades de proporcionarla, en caso de un requerimiento de la autoridad. La obligación de conservar la documentación de beneficiario controlador aplica a todas aquellas personas que no están obligadas a llevar contabilidad.

¿Qué información deberán obtener y conservar los notarios públicos y corredores públicos, que intervienen en la modificación del capital por aumento?

De la revisión a la RMF para 2022, la regla 2.8.1.23. establece que los notarios públicos, corredores públicos o cualquier otra persona que actué en la formación o celebración de los

contratos o actos jurídicos, que intervengan en la modificación al capital fijo o capital variable o al patrimonio del fideicomiso o figura jurídica, deberán obtener y conservar la información soporte del monto y de los actos o contratos necesario para ello.

No obstante, en dicha regla no se establece que información y documentación se deberá conservar en caso de la modificación del capital sea por aumento, y el pago de dicho aumento se realice a pagos; por lo que se recomienda a este tipo de contribuyentes que conserven en contabilidad, por lo menos el monto y las fechas acordadas para el pago del capital.

Procedimiento de solicitud de información sobre los beneficiarios controladores

El SAT puede requerir, mediante solicitud notificada por Buzón Tributario, personalmente o por correo certificado, la información de los beneficiarios controladores, a través del siguiente procedimiento⁸²:

.....
82. Artículo 32-B Ter, segundo y cuarto párrafo del CFF.

El SAT notificará a los sujetos obligados, así como a los terceros con ellos relacionados la “Solicitud de información de sus beneficiarios controladores”.

La información solicitada deberá ser proporcionada en el plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la solicitud.

El plazo podrá ser ampliado por 10 días más, siempre que la solicitud de prórroga esté debidamente justificada y se presente previo al cumplimiento del plazo antes mencionado.

Entrega información.

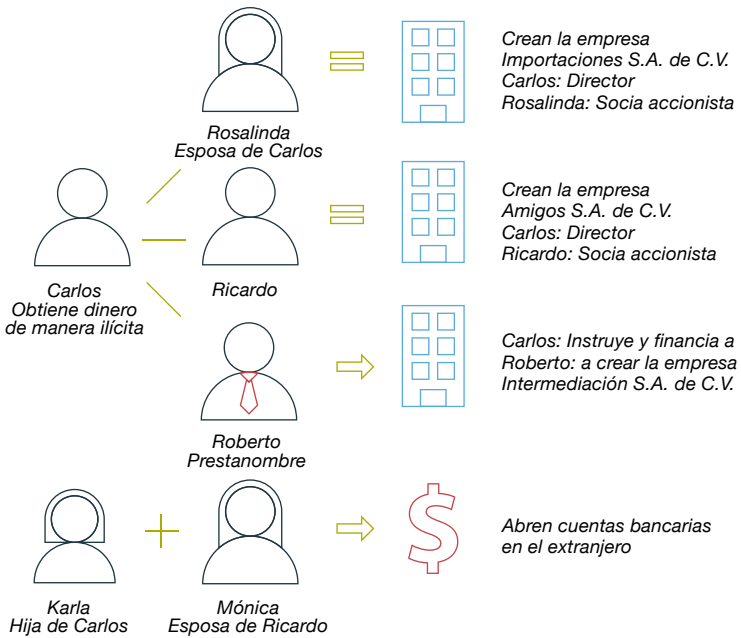
Casos Prácticos

A continuación, se expondrán cuatro casos, de los cuales, dos están inspirados en los ejemplos del informe del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera y el GAFI, denominado “Ocultación de la identidad de los beneficiarios finales”.

Caso 1

1. Carlos se dedica a actividades ilícitas, por lo que obtiene dinero del desarrollo de éstas.
2. Carlos constituye la empresa Importaciones S.A. de C.V., con Rosalinda (su esposa). Ambos son directores y accionistas de la empresa, respectivamente.

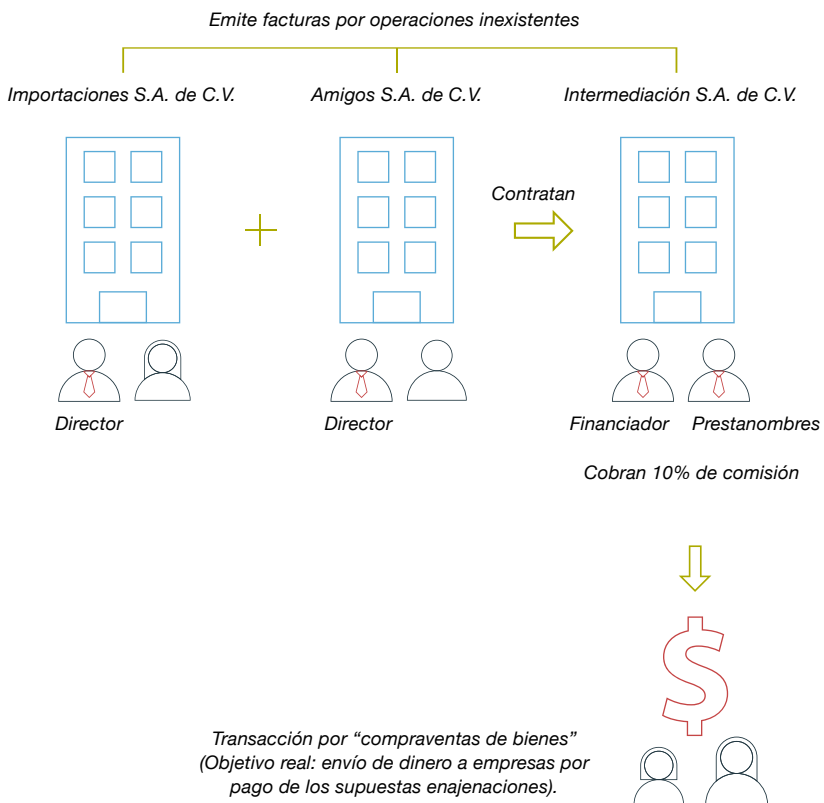
3. Carlos y Ricardo (socios) constituyen la empresa Amigos S.A. de C.V. en la cual el primero es el director y el segundo el accionista.
4. Roberto (contador) por instrucciones de Carlos, constituye la empresa Intermediación S.A. de C.V., cuyo objeto social es prestar servicios de intermediación y la cual se encuentra financiada con dinero de Carlos.
5. Karla (hija de Carlos) y Mónica (esposa de Ricardo) abren cuentas bancarias en el extranjero.



Operación

La operación que realizan las empresas Importaciones S.A. de C.V. y Amigos S.A. de C.V., bajo el control directo de Carlos, se encuentran financiadas por él, por lo que contratan a la empresa Intermediación S.A. de C.V., para que les “brinde servicios de intermediación”, la cual a su vez emite facturas y las empresas le pagan dichos servicios (con dinero proveniente del propio Carlos); mientras Roberto cobra el 10% por su comisión.

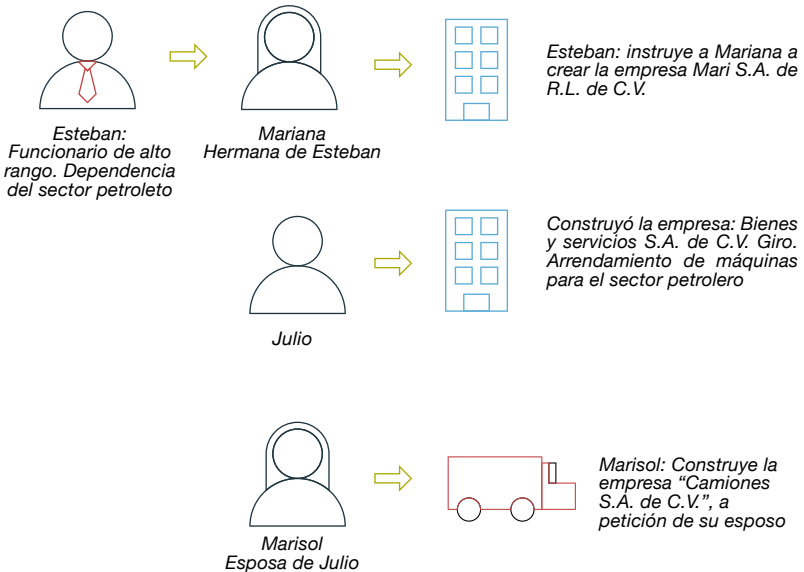
Posteriormente, Roberto, para entregar el dinero a Carlos y a su socio Ricardo, realiza una transacción a las cuentas de Karla y Mónica, con motivo de compraventas de bienes.



De lo anterior, podemos observar que, aunque Carlos es beneficiario controlador de manera directa en dos empresas, lo es de manera indirecta en la empresa que constituyó su contador como prestanombre, razón por la cual sería difícil identificar a Carlos como el beneficiario controlador y más aún las cuentas bancarias de los familiares.

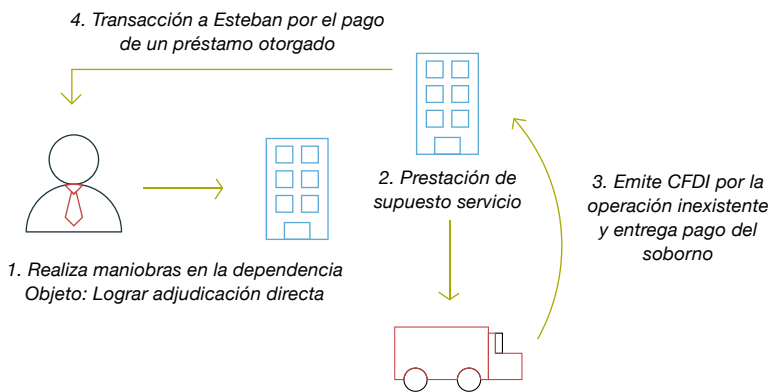
Caso 2

1. Esteban es un funcionario público de alto rango en una dependencia del sector petrolero.
2. Mariana hermana de Esteban, por instrucciones de este último constituye la empresa Mari S.A. de R.L. de C.V.
3. Julio constituyó la empresa “Bienes y servicios S.A. de C.V.”, la cual se dedica a arrendar máquinas utilizadas por el sector petrolero.
4. Marisol esposa de Julio constituye la empresa “Camiones S.A de C.V.”, a petición de su esposo.



Operación

Esteban, de manera interna en la dependencia, hace todo para que la adjudicación directa respecto del arrendamiento de máquinas la obtenga la empresa “Bienes y servicios S.A. de C.V.”, derivado del arreglo al que llegaron los dos a cambio de un soborno, pero dicho pago lo realizarán a través de las empresas que tienen sus familiares, es decir, la empresa Mari S.A. de R.L., la cual simula un servicio a “Camiones S.A de C.V.”, y le emite facturas por la operación inexistente, ésta última le entrega el pago del soborno. Una vez recibido el pago a la empresa de Mariana, ésta le hace una transacción a Esteban por el pago de un préstamo otorgado.



De lo anterior, podemos señalar que en este supuesto el beneficiario controlador es Esteban, quien de manera indirecta (mediante su hermana) constituye una empresa para recibir sobornos disfrazados de pagos por servicios inexistentes, por lo que sería complicado identificar estas operaciones, a menos que dentro de la constitución se observe por el fedatario público o las entidades financieras que Esteban tiene alguna participación con la empresa o con sus cuentas. El siguiente caso fue tomado de la presentación del Manual sobre Beneficiarios Finales de la OCDE, disponible en <https://publications.iadb.org/es/manual-sobre-beneficiarios-finales>

Caso 3

1. El Sr. Miguel Ángel y la Sra. Paola crean la empresa Importadora de tomates S.A de C.V.
2. El Sr. Miguel Ángel, es propietario nominal de Importadora de tomates S.A de C.V., ya que posee el 90% de las acciones de la empresa.



Operación

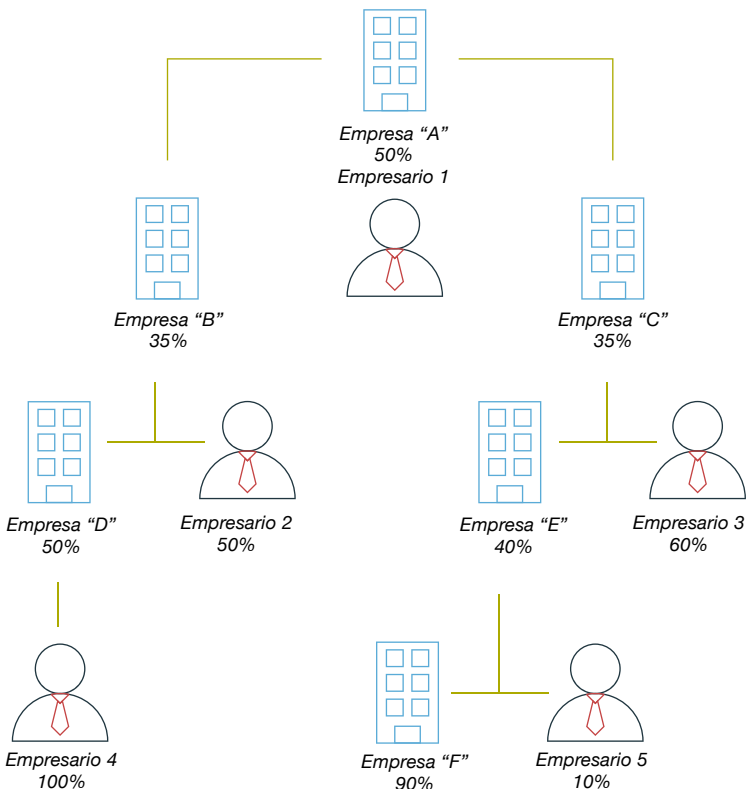
La Sra. Paola, es conocida funcionaria contra quien hay varias denuncias de corrupción, posee varias residencias, incluida una mansión en la misma dirección del domicilio comercial de la empresa y es la única signataria en la cuenta bancaria de la sociedad. El Sr. Miguel Ángel trabaja como guardia de seguridad en la mansión de la Sra. Paola, recibe un pago de \$1,000,000, anuales.



Se concluye que es probable que la Sra. Paola sea la beneficiaria final, toda vez que es la única signataria de la cuenta bancaria de la sociedad, por lo que, aunque en papel, el Sr. Miguel Ángel parece ser el propietario y controla una mayor parte de la sociedad, la Sra. Paola controla el dinero.

Caso 4

1. **Empresario 1.** Posee la capacidad de nombrar o remover a los miembros de la **empresa "A"**.
2. **Empresario 2.** Posee una participación mayoritaria al 25% de la tenencia accionaria de la **empresa "B"**.
3. **Empresario 3.** Posee el control sobre la **empresa "C"**.
4. **Empresario 4.** Posee cargo directivo en la **empresa "D"**.



Como se observa en el esquema anterior, existen varios beneficiarios controladores, toda vez que los empresarios tienen acciones en un porcentaje mayor al 25%, otros tienen el control, cargos directivos o capacidad de nombrar o remover a los miembros de la sociedad. De acuerdo con estas características es posible transparentar quién es el beneficiario.

Mecanismos para identificar, obtener y conservar la información actualizada sobre el beneficiario controlador

Las personas morales deberán identificar, verificar y validar la información sobre los beneficiarios controladores, indicando los porcentajes de participación en el capital de la persona moral, incluyendo la información relativa a la cadena de titularidad, en los casos en que el beneficiario controlador lo sea indirectamente; y cadena de control, en los casos en los que el beneficiario controlador lo sea por medios distintos a la propiedad.⁸³

¿Cuáles son los mecanismos que deben utilizar los sujetos obligados y terceros para identificar, obtener y conservar la información actualizada?

Los sujetos obligados y terceros **deberán implementar procedimientos de control internos debidamente documentados**. Estos procedimientos son aquellos que sean razonables y necesarios para **obtener y conservar** la información sobre la identificación de los beneficiarios controladores y se considerarán parte de la contabilidad que el SAT podrá requerir.⁸⁴

83. Regla 2.8.1.20. de la RMF para 2022.

84. Regla 2.8.1.21. de la RMF para 2022.

A efecto de obtener y conservar la información sobre la identificación de los beneficiarios controladores, los sujetos obligados deberán cuando menos:

- Identificar, verificar y validar adecuadamente al beneficiario controlador, debiendo requerir información de la(s) persona(s) que pueda(n) considerarse como beneficiario(s) controlador(es), para que revelen su identidad y proporcionen la información requerida por el SAT.
- Obtener, conservar y mantener disponible la información fidedigna, completa, adecuada, precisa y actualizada acerca de los datos de la identidad del beneficiario controlador y demás datos⁸⁵, debiendo establecer procedimientos para que la(s) persona(s) que pueda(n) considerarse beneficiario(s) controlador(es) les proporcionen información actualizada de su condición, así como que les informen de cualquier cambio en su condición.
- Conservar la información del beneficiario controlador. De la cadena de titularidad y de la cadena de control, la documentación que sirva de sustento para ello, así como la documentación comprobatoria de los procedimientos de control internos, durante un plazo de cinco años.
- Permitir el acceso oportuno de las autoridades fiscales y otorgarles todas las facilidades para que accedan a la información, registros, datos y documentos relativos a los beneficiarios controladores.

.....

85. La demás información se refiere a la que se establece en la regla 2.8.1.22., la cual se detalla en la pregunta ¿Qué información deben conservar las personas morales, fideicomisos y figuras jurídicas?

¿Qué se debe entender por procedimientos de control interno?

Son los procedimientos razonables y necesarios para obtener y conservar la información sobre la identificación de los beneficiarios controladores y se considerarán parte de la contabilidad que el SAT podrá requerir. Sin embargo, toda vez que la carga fiscal para identificar a los beneficiarios controladores es para los sujetos obligados y terceros; al no definir la propia autoridad qué se considera razonable y necesario, se deja a criterio de éstos la implementación, lo cual posteriormente podría encuadrar en omisiones al no ser la que requiera el SAT.

Por lo que, en caso de que los sujetos obligados o terceros cuenten con dudas sobre lo que es razonable y necesario, deberán observar lo señalado en las reglas de carácter general emitidas por el SAT, en concurrencia con las recomendaciones 24 y 25 del GAFI, así como con la guía que establece la recomendación respecto a la información a recopilar, la cual establece cómo debe estructurarse la información sobre los beneficiarios finales en un **formato estándar**.

El formato estándar, como ya se mencionó, hace más fácil su vinculación con la información de los beneficiarios finales de otras jurisdicciones y así comprender mejor las estructuras de titularidad internacional.

Por ello, aunque el SAT no ha implementado hasta el momento dicho formato, se recomienda a los contribuyentes se remitan a esta guía y a las notas de interpretación que se encuentran en las siguientes ligas:

- Nota interpretativa de la recomendación 24 (transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas):

<https://www.cfatf-gafic.org/index.php/es/documentos/gafi40-recomendaciones/430-fatf-recomendacion-24-transparencia-y-beneficiario-final-de-las-personas-juridicas>

- Nota interpretativa de la recomendación 25 (transparencia y beneficiario final de las estructuras jurídicas):

<https://www.cfatf-gafic.org/es/documentos/gafi40-recomendaciones/431-fatf-recomendacion-25-transparencia-y-beneficiario-final-de-otras-estructuras-juridicas>

- Guía de implementación de la transparencia sobre los beneficiarios:

<https://www.uaf.cl/asuntos/descargar.aspx?arid=758>

¿Qué son la cadena de control y la cadena de titularidad?

El control, en principio, se define como la habilidad para tomar decisiones estratégicas de la persona jurídica y hacer valer estas decisiones.⁸⁶

La **cadena de titularidad** es el supuesto en que se ostenta la propiedad indirecta, a través de otras personas morales.

Por **cadena de control** se entiende el supuesto en que se ostente el control indirecto, a través de otras personas morales, fideicomisos o cualquier otra figura jurídica.⁸⁷ Es importante precisar que la cadena de control se da por un medio distinto al de la propiedad.

86. Glosario de recomendaciones del GAFI.

87. Regla 2.8.1.20. de la RMF para 2022.

¿Qué información deben conservar las personas morales, fideicomisos y figuras jurídicas?

La autoridad fiscal, mediante reglas de carácter general, estableció la información que deberá identificarse y conservarse, estableciendo un listado de conceptos que deberá señalar el beneficiario controlador. A continuación, se menciona la información señalada, misma que deberá formar parte de su contabilidad.

1. Nombres y apellidos completos, los cuales deben corresponder con el documento oficial con el que se haya acreditado la identidad.
2. Alias.
3. Fecha de nacimiento. Cuando sea aplicable, fecha de defunción.
4. Sexo.
5. País de origen y nacionalidad. En caso de tener más de una, identificarlas todas.
6. CURP o su equivalente, tratándose de otros países o jurisdicciones.
7. País o jurisdicción de residencia para efectos fiscales.
8. Tipo y número o clave de la identificación oficial.
9. Clave en el RFC o número de identificación fiscal, o su equivalente, en caso de ser residente en el extranjero, para efectos fiscales.
10. Estado civil, con identificación del cónyuge y régimen patrimonial, o identificación de la concubina o del concubinario, de ser aplicable.
11. Datos de contacto: correo electrónico y números telefónicos.
12. Domicilio particular y domicilio fiscal.
13. Relación con la persona moral o calidad que ostenta en el fideicomiso o la figura jurídica, según corresponda.

14. Grado de participación en la persona moral o en el fideicomiso o figura jurídica, que le permita ejercer los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio o efectuar una transacción.
15. Descripción de la forma de participación o control (directo o indirecto).
16. Número de acciones, partes sociales, participaciones o derechos u equivalentes; serie, clase y valor nominal de las mismas, en el capital de la persona moral.
17. Lugar donde las acciones, partes sociales, participaciones u otros derechos equivalentes se encuentren depositados o en custodia.
18. Fecha determinada desde la cual la persona física adquirió la condición de beneficiario controlador de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.
19. Fecha en la que haya acontecido una modificación en la participación o control en la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.
20. Tipo de modificación de la participación o control en la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.
21. Fecha de terminación de la participación o control en la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.

En caso de no identificar al beneficiario controlador conforme a los criterios de identificación establecidos en el CFF (primer y segundo criterio), se deberán proporcionar los datos respecto de quién o quiénes ocupen el cargo de administrador único de la persona moral o equivalente. En caso de que la persona moral cuente con un consejo de administración u órgano equivalente, será la información de cada miembro de dicho consejo.

En los casos de cadena de titularidad o cadena de control, se deberá contar adicionalmente con la siguiente información:

1. Nombre, denominación o razón social de la o las personas morales, fideicomisos o figuras jurídicas que tienen participación o control sobre la persona moral, fideicomisos o figuras jurídicas.
2. País o jurisdicción de creación, constitución o registro de las personas morales, fideicomisos o figuras jurídicas que tiene participación o control sobre la persona moral, fideicomiso o figuras jurídicas.
3. País o jurisdicción de residencia para efectos fiscales.
4. Clave en el RFC o número de identificación fiscal, o su equivalente, en caso de ser residente en el extranjero, para efectos fiscales.
5. Domicilio fiscal.

¿Qué información deben mantener los terceros que intervienen en la constitución de las personas morales, fideicomisos y figuras jurídicas?

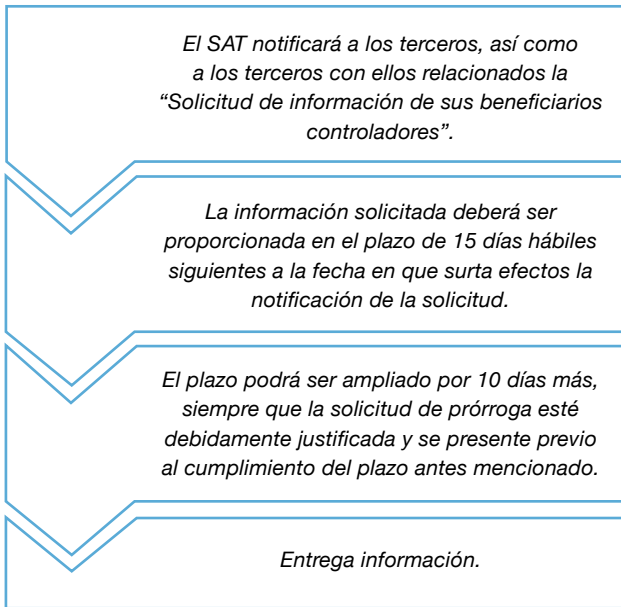
1. Nombres y apellidos completos, los cuales deben corresponder con el documento oficial con el que se haya acreditado la identidad.
2. Alias.
3. Fecha de nacimiento. Cuando sea aplicable, fecha de defunción.
4. Sexo.
5. País de origen y nacionalidad. En caso de tener más de una, identificarlas todas.
6. CURP o su equivalente, tratándose de otros países o jurisdicciones.
7. País o jurisdicción de residencia para efectos fiscales.
8. Tipo y número o clave de la identificación oficial.
9. Clave en el RFC o número de identificación fiscal, o su equivalente, en caso de ser residente en el extranjero, para efectos fiscales.

10. Estado civil, con identificación del cónyuge y régimen patrimonial, o identificación de la concubina o del concubinario, de ser aplicable.
11. Datos de contacto: correo electrónico y números telefónicos.
12. Domicilio particular y domicilio fiscal.
13. Datos de identificación de la notaria, correduría, oficina, así como del titular.
14. Fecha de constitución o celebración, conforme a la escritura, acta, póliza, minuta, similar o equivalente que dé soporte a la constitución o celebración.
15. El nombre completo de quienes constituyen, integran o son parte de la persona moral conforme al acta constitutiva o escritura pública o participaron en la celebración del fideicomiso o figura jurídica.
16. Importe del capital social de la persona moral conforme al acta constitutiva o escritura pública o del patrimonio del fideicomiso o figura jurídica.
17. En caso de modificaciones al capital fijo o capital variable o al patrimonio del fideicomiso o figura jurídica, según corresponda, la información soporte del monto y de los actos o contratos necesarios para ello.
18. Nombre del administrador único o equivalente, en su caso, miembros del consejo de administración u órgano equivalente.
19. Datos de inscripción, en su caso, ante los registros públicos o equivalentes.

¿Cómo solicitará el SAT la información a los notarios públicos o corredores públicos?

Cuando el SAT requiera a los notarios públicos, corredores públicos o cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos que den lugar a la

constitución de personas morales o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica, la información relativa a los beneficiarios controladores; lo hará a través del procedimiento que previamente se ha descrito para los sujetos obligados:



¿Qué obligaciones deben cumplir las entidades financieras e integrantes del sistema financiero?

Para efectos de la Ley del ISR, las entidades financieras y los integrantes del sistema financiero, tratándose de la información relativa a cuentas financieras, estarán **obligados**, con motivo de su intervención, a obtener la información para identificar a los beneficiarios controladores y a adoptar las medidas razonables, a fin de comprobar su identidad y proporcionarla al SAT, cuando dicha autoridad así lo requiera.

¿Cuáles son las entidades públicas que colaborarán con el SAT para verificar la información relativa al beneficiario controlador?

Las siguientes entidades públicas coadyuvarán con el SAT, a través de la celebración de convenios de colaboración o de intercambio de información, y en cualquier otra forma que autoricen las disposiciones aplicables para corroborar que la información proporcionada por los sujetos obligados y los terceros con ellos relacionados, sea exacta y veraz⁸⁸:

<i>Los Registros Públicos en la Ciudad de México y los Estados de la República</i>
<i>La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)</i>
<i>La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)</i>
<i>La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR)</i>
<i>La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)</i>

De la revisión de las disposiciones emitidas por estas entidades públicas, se puede señalar que únicamente la UIF hace alusión a beneficiario controlador en la Ley PRIORPI y sus reglas de carácter general, referentes a cómo presentar el aviso del beneficiario.

.....
88. Artículo 32-B Ter, último párrafo del CFF.

¿Por cuánto tiempo debo conservar la información del beneficiario controlador?

Las reglas de carácter general establecen que la información del beneficiario controlador, de la cadena de titularidad y de la cadena de control, la documentación que sirva de sustento para ello, así como la documentación comprobatoria de los procedimientos de control internos, deberán conservarse por el plazo establecido en el artículo 30 del CFF.

En este sentido, de conformidad con el artículo 30 de dicha disposición, las personas obligadas a llevar contabilidad deberán conservarla a disposición de las autoridades fiscales durante un **plazo de cinco años**.

Tratándose de las actas constitutivas de las personas morales, de los contratos de asociación en participación, de las actas en las que se haga constar el aumento o la disminución del capital social, la fusión o la escisión de sociedades, de las constancias que emitan o reciban las personas morales, **deberán conservarse por todo el tiempo que subsista la sociedad o contrato de que se trate**.

Sanciones

En caso de que los sujetos obligados o terceros no cumplan con las obligaciones establecidas en los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies del CFF, se considerará que cometen las siguientes infracciones:

Infracciones	Monto
<p>No obtener, no conservar o no presentar la información a que se refiere el artículo 32-B Ter del CFF o no presentarla a través de los medios o formatos que señale el SAT dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales</p>	<p>De \$1,500,000.00 a \$2,000,000.00 por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral, fideicomiso o figura jurídica de que se trate.</p>
<p>No mantener actualizada la información relativa a los beneficiarios controladores a que se refiere el artículo 32-B Ter del CFF</p>	<p>De \$800,000.00 a \$1,000,000.00, por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral, fideicomiso o figura jurídica de que se trate.</p>
<p>Presentar la información a que se refiere el artículo 32-B Ter del CFF de forma incompleta, inexacta, con errores o en forma distinta a lo señalado en las disposiciones aplicables</p>	<p>De \$500,000.00 a \$800,000.00, por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral, fideicomiso o figura jurídica de que se trate.</p>

De la exposición de motivos de 08 de septiembre de 2021⁸⁹, se puede advertir que el legislador consideró adicionar los artículo 84-M y 84-N del CFF, a fin de prever sanciones disuasorias ante el incumplimiento de las obligaciones en materia de beneficiario

89. Gaceta Parlamentaria No. 5864-D, la Iniciativa del Ejecutivo federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones legales, entre ellas las del Código Fiscal de la Federación, de fecha 8 de septiembre de 2021. "(...) Adicionalmente, los estándares internacionales de transparencia que se han precisado previamente requieren que la legislación de la jurisdicción evaluada contemple sanciones disuasorias ante el incumplimiento de obligaciones por parte de las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica. (...)".

Localizable en <http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2021/sep/20210908-D.pdf>

controlador, y así cumplir con los estándares internacionales; toda vez que, el GAFI estableció que las sanciones debían ser eficaces, proporcionales y disuasivas⁹⁰, para todas las personas naturales o jurídicas que no cumplan adecuadamente con los requisitos para la identificación del beneficiario controlador.

Nuevo requisito para obtener una Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo.

Derivado de la propuesta para incorporar la regulación de beneficiario controlador y como parte de un acuerdo marco de implementación que garantice el cumplimiento de la norma por parte de los sujetos obligados, se propuso incluir como supuesto para obtener la opinión positiva del cumplimiento, el que se observen todas las obligaciones de identificar, obtener, conservar y proporcionar la información del beneficiario controlador.

Como sabemos obtener la Opinión de cumplimiento en sentido positivo sirve para contar con un documento a través del cual conste el cumplimiento de obligaciones fiscales, la situación del RFC, localización en el domicilio fiscal, el no ubicarse en el listado del artículo 69-B cuarto párrafo del CFF y no contar con créditos fiscales firmes o exigibles; lo cual permite solicitar subsidios o estímulos, así como **contratar con aquellos que reciban y ejerzan recursos públicos federales.**

Motivo por el cual se adicionó la fracción IX, al artículo 32-D del CFF, en el cual se estableció que las autoridades no podrán hacer contrataciones de adquisición, arrendamiento, servicios u obras públicas con aquellos contribuyentes

.....
90. Recomendación 24: Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas, F. RESPONSABILIDAD Y SANCIONES. 18., consultable en la página URL: <https://www.cfatf-gafic.org/es/documentos/gafi40-recomendaciones/430-fatf-recomendacion-24-transparencia-y-beneficiario-final-de-las-personas-juridicas>.

que incumplan las obligaciones referentes al beneficiario controlador.

“Artículo 32-D. Cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato, que reciban y ejerzan recursos públicos federales, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con las personas físicas, morales o entes jurídicos que:

...

IX. Incumplan con las obligaciones establecidas en los artículos 32-B Ter y 32-B Quinquies de este Código.”

Asimismo, la regla 2.1.37. de la RMF para 2022, establece que los contribuyentes que para realizar algún trámite fiscal u obtener alguna autorización deberán obtener su opinión de cumplimiento, para lo cual la autoridad revisará que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales establecidas en los artículos 32-B Ter y 32-B Quinquies del CFF.

VII. Facultades de la autoridad fiscal

Conforme a lo dispuesto en el **artículo 42, fracciones XII y XIII del CFF**, a fin de comprobar que las instituciones financieras, fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos; las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica; así como terceros, cumplen con lo dispuesto en los artículos 32-B, fracción V, 32-B Bis, 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies del CFF; las autoridades fiscales estarán facultadas para iniciar las siguientes facultades de comprobación:

a) Visita domiciliaria

Conforme al artículo 42, fracción XII, del CFF, las autoridades fiscales podrán realizar visitas domiciliarias siguiendo lo dispuesto en el artículo 49 del mismo Código, el cual establece los lugares en los cuales la autoridad podrá ejercer dicha facultad de comprobación y el procedimiento que las autoridades fiscales deberán seguir cuando realicen una visita domiciliaria, como se aprecia en los esquemas siguientes:

¿Dónde se realiza la visita domiciliaria?

La visita domiciliaria se podrá realizar en los siguientes lugares:

1. Domicilio Fiscal
2. Establecimientos
3. Sucursales
4. Locales
5. Oficinas
6. Bodegas
7. Almacenes
8. Puestos fijos
9. Semifijos en la vía pública

Podrán ser visitados:

1. Contribuyentes
2. Asesores Fiscales
3. Instituciones Financieras
4. Fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios
5. Partes contratantes o integrantes, en caso de otra figura jurídica
6. Terceros relacionados con ellos

En donde se realicen:

Actividades, celebren, ejecuten, tengan efectos, documenten, registren o inscriban los actos jurídicos que den lugar al cumplimiento de las obligaciones de los artículos 32-B, fracción V, 32-Bis, 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies del CFF.

Es importante señalar que la fracción I, del artículo 49 del CFF establece los lugares donde la autoridad fiscal llevará a cabo la visita. Esta disposición fue modificada en la reforma fiscal para 2022, a fin de incluir a los sujetos obligados y terceros con ellos relacionados, que tengan la obligación de identificar, conservar y actualizar la información y documentación relacionada con el beneficiario controlador.

Respecto al procedimiento, resulta importante precisar que conforme al artículo 50 del CFF, las autoridades fiscales que conozcan de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento a las disposiciones fiscales, deberán emitir la resolución en un plazo máximo de 6 meses. Sin embargo, dicho plazo podrá suspenderse en los casos previstos en las fracciones I, II y III del artículo 46-A del CCFF, esto es, en caso de:

- Huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que ésta termine.
- Fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se designe al representante legal de la sucesión.
- Que el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso correspondiente o no se localice en el que haya señalado, hasta que se localice.

De igual manera, el plazo se suspenderá, si el visitado interpone algún medio de defensa en el país o en el extranjero contra el acta final de visita; suspensión que comprenderá desde la fecha en que se interponga el medio de defensa y hasta que se dicte la resolución definitiva correspondiente.

En los casos en que la autoridad no se encuentre en alguno de los supuestos anteriores y no emita la resolución en el plazo de 6 meses, quedará sin efectos la orden de visita y las actuaciones que se derivaron durante ésta.

Notificación de Orden de Visita

1. Visitado.
2. Representante Legal.
3. Encargado o quien se encuentre al frente del lugar visitado.

Visitador identificado

El Visitador solicita la designación de 2 testigos, en caso de que no se señalen o las personas designadas no acepten, el visitador los designará.

Acta(s) circunstanciada(s)

Hechos u omisiones, e irregularidades detectadas durante la inspección.

El visitado podrá presentar escrito de pruebas y alegatos para desvirtuarlos, en el plazo de 3 días hábiles.

**Si el visitado o la persona con quien se entiende la diligencia, o los testigos se niegan a firmar el acta, se asentará en ésta, sin que esto le reste validez y valor probatorio.*

Resolución

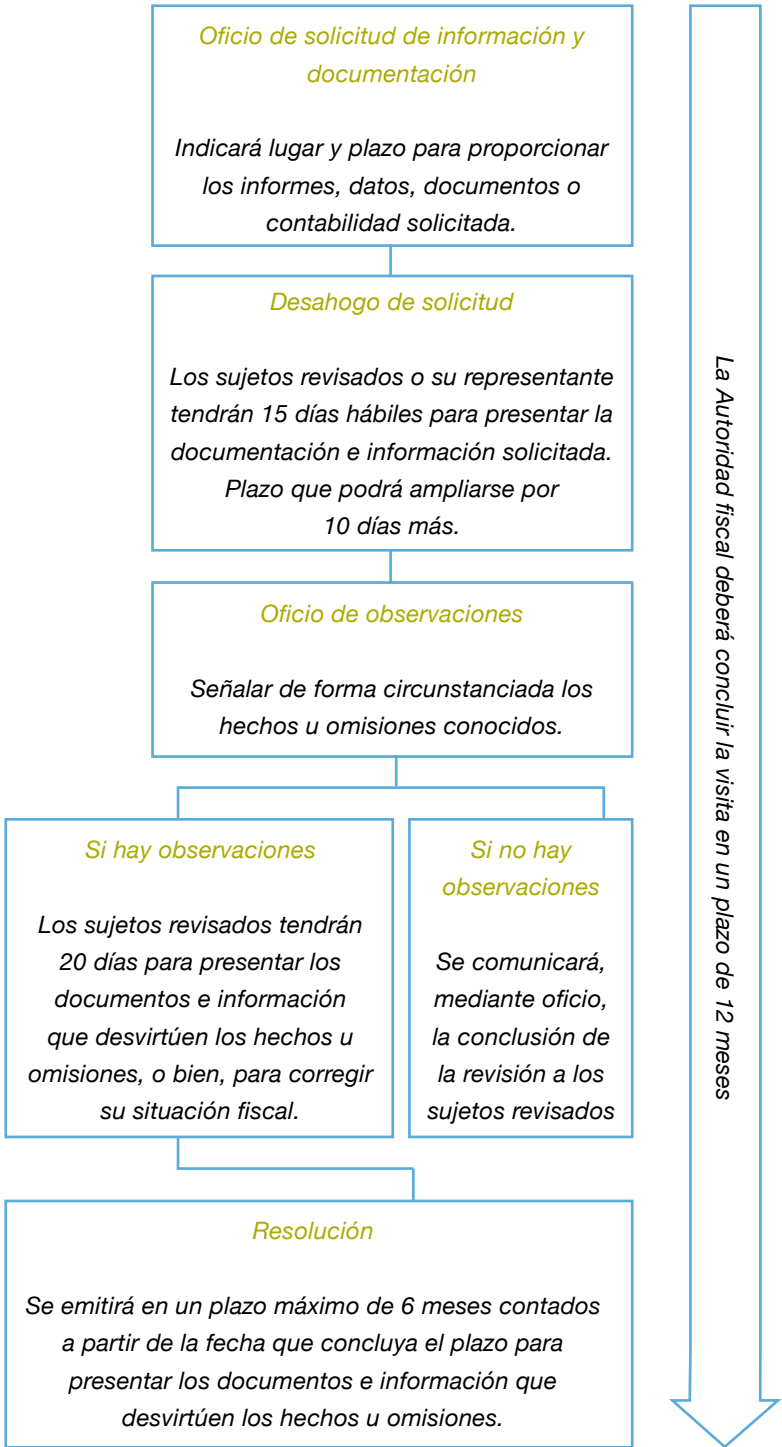
Se emitirá en un plazo máximo de 6 meses contados a partir del vencimiento del plazo para ofrecer pruebas y formular alegatos.

La Autoridad fiscal deberá concluir la visita en un plazo de 12 meses

b) Revisión de gabinete

Conforme al artículo 42, fracción XIII, del CFF, las autoridades fiscales podrán requerir a los a las instituciones financieras; fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos; a las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica; así como a terceros con ellos relacionados, para que exhiban en *su domicilio, establecimientos, en las oficinas de las propias autoridades o a través de Buzón Tributario* (dependiendo de la forma en que se realice el requerimiento), la contabilidad, datos, documentos o informes solicitados, esto con el fin de verificar el cumplimiento de los artículos 32-B, fracción V, 32-Bis, 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies del CFF.

Con el fin de que las autoridades fiscales puedan ejercer dicha facultad de comprobación, deberán llevar a cabo el procedimiento que establece el artículo 48-A del CFF, con relación al artículo 53, fracción c) del mismo Código, el cual es el siguiente:



Del artículo 48-A, fracción X, del CFF, se puede advertir que, si la autoridad fiscal conoce de terceros, hechos u omisiones que puedan entrañar el incumplimiento de las obligaciones de alguno de los sujetos revisados, les darán a conocer a éstos el resultado de aquella actuación en el oficio de observaciones. Ello con el fin de que puedan presentar la documentación que desvirtúe tales observaciones en el plazo de 20 días.

Por otra parte, del artículo 48-A del CFF se puede advertir que al igual que en la visita domiciliaria, en la revisión de gabinete también se podrá suspender el plazo para la emisión de la resolución, cuando ocurra alguno de los supuestos previstos en el artículo 46-A, segundo párrafo, fracciones I, II y III del CFF; o bien, porque los sujetos revisados interpongan algún medio de defensa en México o en el extranjero contra los actos o actividades que deriven de revisión de gabinete.

Asimismo, el artículo en comento establece que, en caso de que las autoridades no notifiquen el oficio de observaciones o, en su caso, el de conclusión de la revisión en el plazo correspondiente, se entenderá que la revisión de gabinete queda concluida en la fecha en que venza el plazo de que se trate y quedarán sin efectos las actuaciones que de ella derivaron.

VIII. Intercambio de información del beneficiario controlador con autoridades extranjeras al amparo de un tratado internacional, regulación en México

Antecedente: Convenio sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Tributaria

El Convenio fue desarrollado conjuntamente por la OCDE y el Consejo de Europa en 1988, y enmendado por protocolo en 2010. Se trata del instrumento multilateral más completo disponible para todas las formas de cooperación fiscal para hacer frente a la evasión y la elusión fiscales. Sus principales características son:⁹¹

- Facilita la cooperación internacional para un mejor funcionamiento de las leyes fiscales nacionales, respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales de los contribuyentes.
- Prevé todas las formas posibles de cooperación administrativa entre los Estados, en la evaluación y recaudación de impuestos. Esta cooperación abarca desde el intercambio de información, incluidos los intercambios automáticos, hasta la recuperación de créditos fiscales extranjeros.
- 144 jurisdicciones participan actualmente en el Convenio. Incluidos todos los países del G20, BRICS, OCDE, los principales centros financieros y un número cada vez mayor de países en desarrollo.

91. <https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm>

- México firmó este instrumento internacional el 27 de mayo de 2010 y llevó a cabo el depósito del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación el 23 de mayo de 2012. En dichas fechas hizo lo mismo con el Protocolo de 2010.⁹²

La creación del Convenio se halla sustentado principalmente:

1. En el creciente y provechoso movimiento internacional de personas, capitales, mercancías y servicios, debido a que permite incrementar las posibilidades de elusión y evasión fiscal, por lo que se requiere aumentar la cooperación entre autoridades fiscales.
2. Para combatir la evasión y elusión fiscal a nivel internacional, tanto en el ámbito bilateral como en el multilateral, mediante la implementación de los más altos estándares internacionales de cooperación en el ámbito fiscal.

Dentro de las principales disposiciones del Convenio, se encuentran aquellas que prevén lo siguiente (se cita traducción no oficial del Convenio al idioma español)⁹³:

1. Las Partes se prestarán asistencia administrativa mutua en asuntos fiscales, incluyendo el intercambio de información.
2. Las Partes intercambiarán cualquier información que sea relevante para la administración o aplicación de su legislación interna pudiendo informar a sus residentes o nacionales antes de transmitir información relacionada con ellos.

92. https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf

93. <https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/ESP-Amended-Convention.pdf>

3. Previa solicitud del Estado requirente, el Estado requerido debe otorgar cualquier información relacionada con personas o transacciones específicas. Si la información disponible del Estado requerido no es suficiente, se deberán tomar las medidas para proporcionar la información solicitada.
4. Dos o más Partes podrán acordar el intercambio automático de información.
5. Se podrá prever que dos o más Partes lleven a cabo auditorías fiscales simultáneas.
6. La información obtenida por una Parte deberá mantenerse como secreta y protegerse de la misma manera que la información obtenida con base en la legislación interna de esa parte.
7. La asistencia contemplada en el Convenio no restringe ni se restringe por las contenidas en acuerdos internacionales existentes o futuros, en otros acuerdos celebrados entre las partes interesadas o en otros instrumentos relacionados con la cooperación en asuntos fiscales.

Caso México. Reforma Fiscal 2022.

Dentro de la iniciativa *“Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos”*, enviada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre de 2021 y publicada en la gaceta parlamentaria de esta última de la misma

fecha⁹⁴; se sustentó la introducción de las reformas al CFF, relativas al beneficiario controlador en materia de Intercambio de información con autoridades extranjeras al amparo de un tratado internacional, de conformidad con lo siguiente:

“... ”

*Derivado de los acuerdos del Foro Global se introdujo el requisito de que la información del beneficiario controlador **estuviera disponible para efectos del Estándar de Intercambio de Información Previa Petición con respecto de personas, estructuras jurídicas relevantes y cuentas bancarias.** (...) Con el objetivo de combatir dichas transacciones y operaciones, así como **para efectos de intercambiar información**, las administraciones tributarias deben tener acceso en tiempo y forma a la identidad de los beneficiarios controladores de todas las personas jurídicas y figuras jurídicas constituidas en el territorio, (...).”*

(Énfasis añadido)

De esta manera, el legislador ordinario aprobó la adición al CFF de los artículos 32-B Ter a 32-B Quinquies, vigentes a partir del 1 de enero de 2022. Dentro de los párrafos primero, tercero y último, del primero de los preceptos citados, se encuentran inmersas la obtención de la información y la obligación de nuestro país, en el contexto internacional, de suministrar información a autoridades fiscales extranjeras.

“Artículo 32-B Ter. *Las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura*

94. <http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2021/sep/20210908-D.pdf>

*jurídica, están obligadas a obtener y conservar, como parte de su contabilidad, y a proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, cuando dicha autoridad así lo requiera, la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores, en la forma y términos que dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter general. **Esta información podrá suministrarse a las autoridades fiscales extranjeras, previa solicitud y al amparo de un tratado internacional en vigor del que México sea parte, que contenga disposiciones de intercambio recíproco de información, en términos del artículo 69, sexto párrafo del presente Código.***

(...)

(Énfasis añadido)

La porción normativa expone la siguiente mecánica respecto a la obtención e intercambio de información relativa al beneficiario controlador:

1. Los sujetos obligados, así como terceros, obtendrán y conservarán la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores.
2. La información obtenida se proporcionará al SAT cuando éste la requiera.
3. La información obtenida por el SAT podrá ser proporcionada a autoridades fiscales extranjeras, previa solicitud y al amparo de un tratado internacional que contenga disposiciones de intercambio recíproco de información, que esté en vigor y en el que nuestro país sea parte.

Estas obligaciones novedosas, dirigidas a las empresas (personas morales) y fideicomisos, consistentes en proporcionar al SAT la información correspondiente a la identidad de los beneficiarios controladores y, a la vez, al tratarse de una nueva atribución de la autoridad fiscal federal, representan para ambos nuevos retos a los que no estaban acostumbrados y sobre los que, por su novedad, no hay antecedente en nuestro país. Incluso, al menos a estas fechas no se ha tenido conocimiento de alguna actuación en la que se haya llevado a la práctica requerimiento alguno de la autoridad en este tema o bien, que alguna autoridad fiscal extranjera haya efectuado su solicitud al margen de un tratado internacional en vigor del que México sea parte.

Al respecto, en materia de tratados internacionales en donde México es parte, la Regla 2.1.2 de la RMF para 2022 enlista los países o jurisdicciones que tienen en vigor un acuerdo amplio de intercambio de información con México, lo cual implica que dicho país o jurisdicción tenga en vigor **i)** un acuerdo de intercambio de información, **ii)** un tratado para evitar la doble tributación con México o **iii)** cuando respecto del país o jurisdicción de que se trate haya surtido efectos la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal y su protocolo: siempre que en todos los casos dicho país o jurisdicción efectivamente intercambie información con México.

Atendiendo a la importancia en materia de coordinación de lavado de dinero, el primer antecedente con el que México y los Estados Unidos de América establecieron un lazo, que se remonta a 1994, bajo el nombre de *Acuerdo de Cooperación Mutua entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Intercambio de Información Respecto a Transacciones en*

*Moneda, a través de Instituciones Financieras para Combatir Actividades Ilícitas.*⁹⁵

Dicho acuerdo dispone fundamentalmente la circulación de información entre ambas naciones concerniente a operaciones y transacciones que pudiesen derivar en blanqueo de activos. En 2003 el acuerdo fue modificado ya que no se había clarificado cuáles serían las autoridades competentes para solicitar y recibir la información en cada país. Cabe recordar que en México la UIF fue creada en 2004.

Este acuerdo conjunto tuvo como resultado, entre otros, las siguientes acciones de investigación:

- **Los flujos de dólares en México.** El estudio conjunto de operaciones de dólares en efectivo entre FinCEN (la UIF estadounidense) y la UIF mexicana se centró en explicar cuál era el origen de los dólares en efectivo, además de identificar las zonas en las que se utilizan y las actividades económicas donde existe mayor afluencia de esta divisa (SHCP 2012). Se concluyó que el origen del dinero se ubicaba en el sector de remesas, turismo y comercio transfronterizo, mismo donde se generaban dólares en mayores cantidades.
- **La Iniciativa Mérida.** La integración de las Unidades de información financiera se enfocan en actualizarse tecnológicamente, por medio de donaciones de software, servicios y aplicaciones especializadas, así como apoyo en infraestructura de hardware y comunicaciones. Para efectos de las operaciones de la UIF, la Iniciativa Mérida significó eliminar las dificultades técnicas que retrasaban y entorpecían la coordinación con su homóloga en Estados Unidos.

.....
95. El impacto de la cooperación México-Estados Unidos en el combate al lavado de dinero.
Localizable en:
<https://www.redalyc.org/journal/5526/552656690005/html/>

- **Red criminal de lavado de dinero.** A comienzos de 2013, la UIF mexicana recibió de diferentes instituciones financieras mexicanas numerosos Reportes de Actividades Sospechosas (SARs, por sus siglas en inglés) señalando a 43 compañías en México y en el extranjero cuyo irregular manejo de clientes y servicios financieros sugería irregularidades de procedimiento compatibles con actos, omisiones u operaciones que podrían favorecer la comisión del delito de lavado de dinero. En respuesta, la UIF dio seguimiento a dichos reportes haciendo uso del Programa Computarizado de Análisis de Alto Riesgo (CRACP, por sus siglas en inglés), software que da prioridad a los informes con las calificaciones de riesgo más altas, que son revisadas de manera detallada y oportuna. Los resultados arrojados fueron que 5 de las entidades sospechosas tenían niveles de riesgo alarmantes.

Por otra parte en julio de 2014, el Consejo de la OCDE adoptó la recomendación relativa al Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal (CRS); y en consecuencia México logra firmar en octubre de 2014 el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre el Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras (MCAA), durante la 7ª Reunión del Foro Global Sobre la Transparencia y el Intercambio de Información con Fines Fiscales en la Ciudad de Berlín, Alemania, cuyo objetivo primordial es intercambiar información de manera automática y recíproca entre un total de 50 países.⁹⁶

En primera instancia las Instituciones Financieras, como principales agentes transmisores de intercambio de información internacional, informan a los países interesados

.....

96. Horizontes de la Contaduría en las Ciencias Sociales, Año 5, Número 9, Julio-Diciembre 2018. El intercambio de información financiera para efectos fiscales y la repatriación de capitales en México. Localizable en: <https://www.uv.mx/iic/files/2018/12/Num09-Art12-160.pdf> Pág. 139.

los movimientos de sus cuentas financieras las cuales desde el momento de su contratación se sabe que están sujetas a comunicación a los interesados de los otros países. Posteriormente, en la fase de procedimientos de diligencia debida⁹⁷, lo que se busca es aplicar las reglas operativas necesarias para poder transmitir dicha información, cuyo resultado final es informar sobre:

- a) Identificación de las personas sujetas a ser informadas.
- b) Saldo en las cuentas financieras que se tengan a una fecha determinada.
- c) Monto de los ingresos totales que se hayan generado en ese mismo periodo⁹⁸.

Respecto a la aplicabilidad del modelo en México, se puede decir que se ha alcanzado una cierta efectividad. De acuerdo con los informes de la OCDE, los resultados de este tipo de mecanismos son los siguientes:

- a) Ser una base única para la cooperación internacional.
- b) Ser flexible, con la posibilidad de efectuar reservas.
- c) Ser uniforme, en cuestión de crearse un mecanismo único de coordinación internacional.
- d) Contar con una multitud de formas de cooperación para todos los impuestos.
- e) La reducción del Secreto bancario, con el fin de que se pueda alcanzar la transparencia en el intercambio de información.

.....

97. En las recomendaciones del GAFI se establece que, para tener una debida diligencia, entre otras cosas, se debe identificar al cliente y beneficiario final, recopilar información, y monitorear las transacciones.

98. Ibidem. Pág. 140.

IX. Posibles afectaciones de los sujetos obligados y terceros

De la revisión en conjunto al CFF y a la RMF para 2022, se advierten posibles afectaciones a los sujetos obligados y terceros, pues de estos ordenamientos se advierte que no contemplan ciertos elementos que señala el documento denominado “Guías y mejores prácticas del grupo de acción financiera internacional para asistir a los países en el cumplimiento de las 40 recomendaciones”, emitido por el GAFILAT, así como tampoco se establece de forma clara las obligaciones de los involucrados o la forma en que deberán implementarse los procedimientos de control interno, tal y como se advierte del siguiente cuadro:

Código Fiscal de la Federación	Regla de RMF para 2022	Afectación
<p><i>Artículo 32-B Ter, primer párrafo del CFF, establece la obligación a las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, obtener y conservar, como parte de su contabilidad, y a proporcionar</i></p>	<p><i>La regla 2.8.1.22. señala que deberán integrar como parte de su contabilidad la siguiente información:</i></p> <p><i>*Estado civil, con identificación del cónyuge y régimen patrimonial, o identificación de la concubina o del concubinario, de ser aplicable.</i></p> <p><i>*Domicilio particular</i></p>	<p><i>En las guías del GAFI, se contemplan a familiares del beneficiario controlador. En México, únicamente se señala al cónyuge, dejando fuera a los familiares.</i></p>

<p><i>al Servicio de Administración Tributaria de acuerdo a lo que determine conforme a las reglas que expida.</i></p>		
<p>Artículo 32-B Ter, tercer párrafo del CFF, establece la obligación a los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de persona moral, celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica, a obtener la información para identificar a los beneficiarios controladores y comprobar su identidad para proporcionarla al SAT de acuerdo a lo que determine conforme a las reglas que expida.</p>	<p>La regla 2.8.1.21. indica que los sujetos obligados, así como los que intervienen en la constitución de éstos (notarios, corredores, etc.), deberán:</p> <p>Implementar procedimientos de control internos debidamente documentados; los cuales deberán ser razonables y necesarios y se considerarán parte de la contabilidad.</p>	<p>El artículo 32-B Ter, primer párrafo señala que sólo las personas morales, las partes del fideicomiso, o las partes contratantes o integrantes de otra figura jurídica deben obtener y conservar en su contabilidad lo relacionado con el beneficiario controlador.</p> <p>No obstante, aun cuando el tercer párrafo de dicho ordenamiento no lo establece, la regla también establece a los terceros que intervienen en la</p>

		<p><i>formación o celebración de los contratos o actos jurídicos; la obligación de conservar en su contabilidad lo referente al beneficiario controlador.</i></p> <p><i>El GAFI recomienda tener un formato homogéneo para obtener la información del beneficiario final, en algunos casos es mediante una declaración informativa.</i></p>
<p>Artículo 32-B Quinquies, último párrafo del CFF, establece la obligación de mantener actualizada la información referente a los beneficiarios controladores, para lo cual el SAT podrá emitir reglas de carácter general para</p>	<p><i>En la fracción II de la regla 2.8.1.21. señalan que los sujetos obligados deben establecer procedimientos de control interno debidamente documentados para que la persona que pueda considerarse beneficiario</i></p>	<p><i>La disposición legal ni la regla establecen la manera en que los sujetos obligados y terceros deberán mantener actualizada la información, dejando a consideración</i></p>

<p><i>la aplicación de dicho artículo.</i></p>	<p><i>controlador le proporcione información actualizada de su condición como tal, para que en su caso sea proporcionada a la autoridad fiscal.</i></p>	<p><i>del contribuyente el procedimiento para pedirle al beneficiario controlador la actualización, pero hay incertidumbre sobre qué pasa si los procedimientos utilizados no bastan para lo que requiere el SAT.</i></p> <p><i>El GAFI recomienda tener un formato homogéneo para obtener la información del beneficiario, en algunos casos es mediante una declaración informativa.</i></p>
--	---	---

Por otra parte, los siguientes sujetos obligados consideran que la regulación sobre el beneficiario controlador contiene diversas indefiniciones que provocan incertidumbre:

- Las disposiciones fiscales referentes a los sujetos contienen expresiones poco claras y/o ambiguas, tal como es el caso de “otras figuras jurídicas”, “otros actos

jurídicos”, así como fideicomiso, procedimientos de control interno y cuándo estos procedimientos tienen el carácter de razonables y necesarios.

- Las instituciones de crédito, principalmente las Instituciones de Banca de Desarrollo, tienen incertidumbre para determinar quiénes son sus beneficiarios controladores cuando intervengan como fiduciarias, fideicomisarias y fideicomitentes en actuaciones notariales. Esta misma preocupación la tienen los Organismos Descentralizados, cuando son fideicomitentes o fideicomisarios.
- Los consejos de administración de las instituciones de banca múltiple y de banca de desarrollo son muy grandes y, en el caso de la banca de desarrollo, intervienen funcionarios públicos (titulares y suplentes), de los que habría que pedir la información sobre nombre, CURP, RFC, domicilio, acta de matrimonio, en su caso, copia de identificación del cónyuge, alias, entre otros.
- En México los fiduciarios únicamente pueden ser personas morales autorizadas expresamente por la normatividad respectiva, por lo que resultaría innecesario considerar a las fiduciarias como beneficiarios controladores.

El SAT recientemente publicó en su Portal de Internet algunas preguntas y respuestas frecuentes sobre el tema del beneficiario controlador, mismas que establecen definiciones sobre el beneficiario controlador. Se prevé que esta publicación se vaya ampliando con el tiempo, dadas las múltiples dudas y confusiones que existe entre los obligados.

Algunos ejemplos de lo que el SAT ha definido son: **i)** en el caso de que el Estado mexicano controle de manera exclusiva a una persona moral, esta última, así como los fedatarios

públicos no estarán obligados a identificar al beneficiario controlador; **ii)** la obligación de obtener y conservar la información de beneficiario controlador como parte de su contabilidad, aplica a todas las figuras jurídicas, incluyendo aquellas que no se encuentran inscritas en el RFC. Para una mayor referencia, se puede consultar el apéndice 3 de este estudio.

X. Conclusiones

1. Si bien el concepto de beneficiario controlador se introdujo a la legislación tributaria mexicana en 2021, no es una figura de reciente creación, ya que su origen data del año 2012 cuando el GAFI lo incluyó dentro del glosario de las recomendaciones 24 y 25. Su introducción (en vigor a partir de 2022), es un refrendo del compromiso acordado por México tanto con el GAFI como con el Foro Global de la OCDE, quienes de manera continua realizan evaluaciones mutuas⁹⁹ a los países.
2. Es reconocido que nuestro marco legal e institucional es particularmente sólido, respecto de la tipificación del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y la inteligencia financiera; sin embargo, hasta 2021 carecía de medidas preventivas clave, como lo es la identificación de los **beneficiarios finales (denominados beneficiarios controladores en nuestra legislación)**, la cual resulta vital para frenar el lavado de dinero y combatir el financiamiento del terrorismo.

Asimismo, se detectó que, respecto a la identificación del beneficiario final entre los notarios públicos y corredores públicos, también había mayor oportunidad de mejora, pues dichos fedatarios públicos son el elemento central para garantizar la precisión y la autenticidad de la información que se presenta a los registros federales. De ahí que la reforma los considerara en las tareas de identificación del beneficiario final.

3. Es importante señalar que, a diferencia de otros países, México no cuenta con un registro público de beneficiarios

99. <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/IEM-Mexico-2018-Spanish.pdf>

controladores, que garantice que dicha información esté a disposición de cualquier autoridad de manera oportuna y no sólo del SAT. En este caso, la autoridad tendrá que requerir dicha información al sujeto obligado o a terceros, quienes la aportarán en un plazo de 15 días hábiles que se pueden prorrogar por 10 días más, es decir, la información puede tardar casi un mes en obtenerse, por lo que se prevé cierta complicación para disponer oportunamente de la información.

4. Se considera que, al dejar la carga de la identificación a los sujetos obligados y a terceros, así como la conservación de la información, no a través de formatos establecidos, sino mediante procedimientos de control internos debidamente documentados, que deben ser razonables y necesarios; se tendrá disparidad de criterios al no estar definidos por la propia autoridad. Así, se espera que al momento de realizar un requerimiento de información, visita domiciliaria o revisión de gabinete, no se tomen en cuenta la forma sino el contenido. Al respecto, **PRODECON** considera que, dado que el legislador dejó abierta la posibilidad de acudir a las recomendaciones del GAFI, se podrá hacer uso de las guías o notas interpretativas para sustentar la forma en la que se está obteniendo la información, así como su conservación.

Ahora bien, los obligados sostienen que cumplir con las nuevas obligaciones es una enorme carga administrativa, cuyo costo lo tendrán que asumir o trasladar a sus clientes, implicando introducir costos a la economía. Las nuevas obligaciones implican: **i)** identificar, verificar y validar adecuadamente al beneficiario controlador; **ii)** obtener, conservar y mantener disponible la información fidedigna y actualizada del beneficiario controlador; **iii)** conservar la información del beneficiario controlador, de la cadena de titularidad y de la cadena de control; y **iv)** proporcionar y

otorgar a las autoridades todas las facilidades para que accedan a la información, registros, datos y documentos relativos a los beneficiarios controladores.

Las nuevas obligaciones les implicaría establecer y adecuar sus procedimientos, desarrollar los sistemas y aplicaciones electrónicas, con el fin de que las medidas en materia de beneficiario controlador sean debidamente cumplidas por los contribuyentes a quienes van dirigidas, generando la mínima incertidumbre jurídica y eliminando confusiones en su cumplimiento. Ante esto, es de esperarse que la autoridad tenga una amplia disposición ante estos reclamos, a efecto de que la medida cumpla el objetivo para el cual fue diseñada y aprobada la reforma.

Además, debe tenerse presente que, a cambio, las medidas introducidas refuerzan la transparencia para la identificación de los beneficiarios controladores, permitiendo tener un enérgico control para evitar el blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo y la evasión y la elusión fiscal, en operaciones transnacionales.

5. Antes de la reforma, para identificar al beneficiario final para efectos del intercambio de información, las autoridades tributarias, generalmente, dependían de técnicas de investigación o de asistencia internacional, procesos que eran tardados y, muchas veces, no garantizaban el acceso a la información sobre el beneficiario final. Ahora con esta reforma, se da un paso más en el compromiso internacional para que, bajo el estándar de lo aplicado a nivel internacional, el intercambio de información entre los países sea más eficiente y, por ende, la acción de las autoridades tenga mejores resultados en cuanto a transparentar este tipo de operaciones transnacionales.

6. Se debe reconocer que hoy en día, los fedatarios públicos ya tienen la posibilidad de identificar parte de la información, al constituir o celebrar la creación o modificación de los sujetos obligados, aunque de ahora en adelante la información será más detallada.
7. Es importante señalar que no se busca y tampoco se debe generalizar la idea de que todos los beneficiarios controladores realizan malas prácticas. En este caso, si bien la información se solicita a la generalidad de los sujetos obligados, esto es para permitir a la autoridad fiscal fortalecer su análisis de riesgo y enfocar sus facultades de fiscalización en aquellos contribuyentes que realmente suponen un riesgo.

Asimismo, la introducción de la regulación en materia de beneficiario final no tendrá un efecto inmediato, pues es el primer paso de muchos que México tendrán que dar para implementar y perfeccionar esta regulación. Al respecto, basta ver la experiencia de otros países que se analizaron en este estudio, para observar lo largo y complicado que ha resultado el proceso para la adopción de estos estándares internacionales. No obstante, es de esperarse que este gran paso permita que, en la próxima evaluación mutua que realice el GAFI a nuestro país, se obtenga una calificación favorable.

8. Además de cumplir con el estándar internacional, es importante observar que la regulación implementada no transgreda los derechos a los contribuyentes, por lo que **PRODECON** estará al pendiente de cualquier problemática que se llegue a suscitar con motivo de las solicitudes de requerimientos de información o del ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal. Por ello, ponemos a tu disposición nuestros servicios de Asesoría,

Quejas, Representación Legal, Consultas Especializadas y Acuerdos Conclusivos, en caso de cualquier duda, o bien, si en el cumplimiento de estas nuevas obligaciones, consideras que la autoridad transgrede tus derechos como contribuyente.

XI. Apéndice 1

Exposición de motivos

CAMARA DE ORIGEN: DIPUTADOS EXPOSICION DE MOTIVOS
Ciudad de México, miércoles 8 de septiembre de 2021.
INICIATIVA DEL EJECUTIVO FEDERAL Gaceta No. 5864-D.

26. Regulación en materia de beneficiario controlador

A fin de garantizar condiciones de igualdad y dar respuesta al llamado del Grupo de los Veinte (G20) que invitaba a remitirse a los trabajos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el concepto de beneficiario controlador, el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales (Foro Global) reforzó su norma de intercambio de información bajo petición, de cara a la segunda ronda de evaluaciones del Grupo de Revisión entre Pares, introduciendo en sus evaluaciones el concepto de beneficiario controlador, tal y como lo definió el GAFI.

Derivado de los acuerdos del Foro Global se introdujo el requisito de que la información del beneficiario controlador estuviera disponible para efectos del Estándar de Intercambio de Información Previa Petición con respecto de personas, estructuras jurídicas relevantes y cuentas bancarias.

Tanto el GAFI como el Foro Global tienen el mandato de evaluar a los países para confirmar la disponibilidad y la accesibilidad por parte de las autoridades tributarias de información confiable y actualizada sobre los beneficiarios controladores, de los vehículos jurídicos que sean empleados en cada país, por ejemplo, sociedades mercantiles, sociedades de personas, fideicomisos, fundaciones, entre otras, ya que esta información es relevante para combatir la evasión fiscal, el financiamiento

del terrorismo y el lavado de activos, es decir, las transacciones y operaciones complejas que permiten utilizar dinero de origen ilícito con una apariencia de licitud.

Con el objetivo de combatir dichas transacciones y operaciones, así como para efectos de intercambiar información, las administraciones tributarias deben tener acceso en tiempo y forma a la identidad de los beneficiarios controladores de todas las personas jurídicas y figuras jurídicas constituidas en el territorio, lo cual se traduce en la obligación por parte de las autoridades de garantizar la disponibilidad y el acceso a dicha información, además de ser correcta y estar actualizada.

Adicionalmente, la disponibilidad de la información sobre los beneficiarios controladores constituye un elemento clave de los estándares de transparencia fiscal internacional y se ha convertido en uno de los principales temas para fines del intercambio de información previa petición, debido a ello, este elemento ha sido incluido en las evaluaciones conducidas por el Foro Global; evaluaciones en las que eventualmente México participará en calidad de país evaluado. En consecuencia, es un compromiso ineludible que nuestro país cuente con un marco jurídico que garantice el cumplimiento de los estándares mínimos de transparencia.

El concepto de beneficiario controlador del GAFI, adoptado por el Foro Global, es el marco de referencia para todas las administraciones y debe entenderse como la persona o grupos de personas físicas que efectivamente controlen o se beneficien económicamente de una persona jurídica o figura jurídica, dicho control o beneficio económico se puede ejercer teniendo un porcentaje importante de las acciones de la entidad, o bien, ese porcentaje representa una participación significativa del derecho a voto o de la capacidad para nombrar o remover a los miembros directivos de la entidad.

En este contexto se somete a consideración de esa Soberanía adicionar en el Código Fiscal de la Federación los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies para establecer la obligación respecto de las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, de obtener y conservar, como parte de su contabilidad y a proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, la información relativa a sus beneficiarios controladores en forma fidedigna, completa y actualizada.

Lo anterior, con la finalidad de que la administración tributaria cumpla los estándares internacionales que exigen niveles de transparencia mínimos en relación con los beneficiarios controladores de sociedades mercantiles, fideicomisos y otras figuras jurídicas con fines fiscales. En ese sentido, para los evasores de impuestos y otros infractores de la ley resultará más difícil ocultar sus actividades delictivas y los fondos ilícitos en jurisdicciones donde este tipo de norma, objeto de esta propuesta, se ha puesto en marcha en su totalidad.

Adicionalmente, los estándares internacionales de transparencia que se han precisado previamente requieren que la legislación de la jurisdicción evaluada contemple sanciones disuasorias ante el incumplimiento de obligaciones por parte de las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica.

En este sentido, se somete a consideración de esa Soberanía la adición de los artículos 84-M y 84-N al Código Tributario, que prevén los supuestos de infracciones y sanciones en materia de beneficiario controlador.

XII. Apéndice 2

Legislación en México aplicable al tema de Beneficiario Controlador:

a) Código Fiscal de la Federación

Artículo 32-B Ter. Las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, están obligadas a obtener y conservar, como parte de su contabilidad, y a proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, cuando dicha autoridad así lo requiera, la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores, en la forma y términos que dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter general. Esta información podrá suministrarse a las autoridades fiscales extranjeras, previa solicitud y al amparo de un tratado internacional en vigor del que México sea parte, que contenga disposiciones de intercambio recíproco de información, en términos del artículo 69, sexto párrafo del presente Código.

El Servicio de Administración Tributaria notificará a las personas morales; fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos; a las partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica obligada; así como, a terceros con ellos relacionados, la solicitud de información de sus beneficiarios controladores de conformidad con lo establecido en el artículo 134 del presente ordenamiento. Dicha información deberá ser proporcionada dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la solicitud. Este plazo se podrá ampliar por las autoridades fiscales por diez días más, siempre y cuando medie

solicitud de prórroga debidamente justificada y ésta se presente previo al cumplimiento del plazo anteriormente mencionado.

Los notarios públicos, corredores públicos y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de dichas personas o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica, así como las entidades financieras y los integrantes del sistema financiero para fines de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tratándose de la información relativa a cuentas financieras, estarán obligados con motivo de su intervención a obtener la información para identificar a los beneficiarios controladores y a adoptar las medidas razonables a fin de comprobar su identidad, para proporcionarla al Servicio de Administración Tributaria cuando dicha autoridad así lo requiera, en la forma y términos que dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter general.

Cuando el Servicio de Administración Tributaria requiera a los sujetos referidos en el párrafo anterior la información relativa a los beneficiarios controladores, el plazo para proporcionarla será el establecido en el segundo párrafo de este artículo. Este plazo se podrá ampliar por la autoridad fiscal por diez días más, siempre y cuando medie solicitud de prórroga debidamente justificada y ésta se presente previo al cumplimiento del plazo anteriormente mencionado.

Los registros públicos en la Ciudad de México y en los Estados de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, coadyugarán con el Servicio de Administración Tributaria, a través de la celebración de convenios de colaboración o de intercambio de información y en cualquiera otra forma que

autoricen las disposiciones aplicables, para corroborar la exactitud y veracidad de la información que sea proporcionada por las personas morales; fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos; a las partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica obligada; terceros con ellos relacionados; personas que intervengan en la celebración de contratos o actos jurídicos, así como entidades financieras e integrantes del sistema financiero relativa a beneficiarios controladores.

Artículo 32-B Quáter. Para efectos de este Código se entenderá por beneficiario controlador a la persona física o grupo de personas físicas que:

I. Directamente o por medio de otra u otras o de cualquier acto jurídico, obtiene u obtienen el beneficio derivado de su participación en una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, así como de cualquier otro acto jurídico, o es quien o quienes en última instancia ejerce o ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio o en cuyo nombre se realiza una transacción, aun y cuando lo haga o hagan de forma contingente.

II. Directa, indirectamente o de forma contingente, ejerzan el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.

Se entiende que una persona física o grupo de personas físicas ejerce el control cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o por cualquier otro acto jurídico, puede o pueden:

a. Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes.

b. Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del 15% del capital social o bien.

c. Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.

Tratándose de fideicomisos, se considerarán beneficiarios controladores el fideicomitente o fideicomitentes, el fiduciario, el fideicomisario o fideicomisarios, así como cualquier otra persona involucrada y que ejerza, en última instancia, el control efectivo en el contrato, aún de forma contingente. El Servicio de Administración Tributaria podrá emitir reglas de carácter general para la aplicación de este artículo.

Para la interpretación de lo dispuesto en este artículo serán aplicables las Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional y por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, acorde a los estándares internacionales de los que México forma parte, cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia de las disposiciones fiscales mexicanas.

Artículo 32-B Quinquies. Las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos; así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica,

deberán mantener actualizada la información referente a los beneficiarios controladores a que se refiere el artículo 32-B Ter de este Código. Cuando haya modificaciones en la identidad o participación de los beneficiarios controladores, las personas morales; las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos; así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, deberán actualizar dicha información dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que se haya suscitado la modificación de que se trate.

El Servicio de Administración Tributaria podrá emitir reglas de carácter general para la aplicación de este artículo.

Artículo 32-D. Cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato, que reciban y ejerzan recursos públicos federales, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con las personas físicas, morales o entes jurídicos que:

IX. Incumplan con las obligaciones establecidas en los artículos 32-B Ter y 32-B Quinquies de este Código.

Artículo 42. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios, los terceros con ellos relacionados, los asesores fiscales, las instituciones financieras; las fiduciarias, los fideicomitentes o los fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos, y las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, determinar las contribuciones

omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:

XII. Practicar visitas domiciliarias a las instituciones financieras; fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos; a las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica; así como, a terceros con ellos relacionados, a fin de verificar el cumplimiento de los artículos 32-B, fracción V, 32-B Bis, 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies de este Código. Las visitas domiciliarias a que se refiere esta fracción se llevarán a cabo conforme al procedimiento establecido en el artículo 49 de este Código.

XIII. Requerir a las instituciones financieras; fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos; a las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica; así como a terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos, en las oficinas de las propias autoridades o a través del Buzón Tributario, dependiendo de la forma en que se efectuó el requerimiento, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran, a efecto de llevar a cabo su revisión para verificar el cumplimiento de los artículos 32, fracción V, 32-B Bis, 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies de este Código. El ejercicio de la facultad a que se refiere esta fracción se llevará a cabo conforme al procedimiento establecido en el artículo 48-A de este Código.

Artículo 84-M. Son infracciones relacionadas con las obligaciones establecidas en los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies de este Código, las siguientes:

I. No obtener, no conservar o no presentar la información a que se refiere el artículo 32-B Ter de este Código o no presentarla a través de los medios o formatos que señale el Servicio de Administración Tributaria dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales.

II. No mantener actualizada la información relativa a los beneficiarios controladores a que se refiere el artículo 32-B Ter de este Código.

III. Presentar la información a que se refiere el artículo 32-B Ter de este Código de forma incompleta, inexacta, con errores o en forma distinta a lo señalado en las disposiciones aplicables.

Artículo 84-N. A quien cometa las infracciones a que se refiere el artículo 84-M de este Código, se le impondrán las siguientes multas:

I. De \$1,500,000.00 a \$2,000,000.00 a las comprendidas en la fracción I, por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral, fideicomiso o figura jurídica de que se trate.

II. De \$800,000.00 a \$1,000,000.00 a la establecida en la fracción II, por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral, fideicomiso o figura jurídica de que se trate.

III. De \$500,000.00 a \$800,000.00 a la establecida en la fracción III, por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral, fideicomiso o figura jurídica de que se trate.

b) Resolución Miscelánea Fiscal 2022

Criterios para la determinación de la condición de beneficiario controlador de las personas morales

2.8.1.20. Para los efectos del artículo 32-B Ter del CFF, en la identificación de los beneficiarios controladores, las personas morales, deberán aplicar lo dispuesto en el artículo 32-B Quáter, fracciones I y II, incisos a), b) y c) de forma sucesiva, como criterios para su determinación, de tal modo que cuando lo previsto en la fracción I del artículo 32-B Quáter del CFF ha sido aplicado, pero no ha resultado en la identificación del beneficiario controlador, se deberá aplicar lo previsto en la fracción II, incisos a), b) y c) de dicha disposición.

Para efectos de la obtención de la información a que se refiere el artículo 32-B Ter del CFF, las personas morales deberán identificar, verificar y validar la información sobre los beneficiarios controladores, indicando los porcentajes de participación en el capital de la persona moral, incluyendo la información relativa a la cadena de titularidad, en los casos en que el beneficiario controlador lo sea indirectamente. Se entiende por cadena de titularidad el supuesto en que se ostente la propiedad indirecta, a través de otras personas morales. Asimismo, las personas morales también deberán identificar, verificar y validar la información relativa a la cadena de control, en los casos en los que el beneficiario controlador lo sea por medios distintos a la propiedad. Se entiende por cadena de control el supuesto en que se ostente el control indirectamente, a través de otras personas morales, fideicomisos o cualquier otra figura jurídica.

Cuando no se identifique a persona física alguna bajo los criterios establecidos en esta regla, en relación con el artículo 32-B Quáter del CFF, se considerará como beneficiario controlador a la persona física que ocupe el cargo de administrador único

de la persona moral o equivalente. En caso de que la persona moral cuente con un consejo de administración u órgano equivalente, cada miembro de dicho consejo se considerará como beneficiario controlador de la persona moral.

Mecanismos para identificar, obtener y conservar la información actualizada sobre el beneficiario controlador

2.8.1.21. Para los efectos del artículo 32-B Ter, primer y tercer párrafos del CFF, las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de dichas personas o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica, deberán implementar procedimientos de control internos debidamente documentados. Estos procedimientos serán todos aquellos que sean razonables y necesarios para obtener y conservar la información sobre la identificación de los beneficiarios controladores y se considerarán parte de la contabilidad que el SAT podrá requerir.

Para efectos de lo establecido en los artículos 32-B Ter y 32-B Quinquies del CFF, a efecto de obtener y conservar información sobre la identificación de los beneficiarios controladores, las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, según corresponda, los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de dichas personas o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica deberán cuando menos:

I. Identificar, verificar y validar adecuadamente al beneficiario controlador de las personas morales, los fideicomisos y de cualquier otra figura jurídica.

Para efectos de lo anterior, las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, según corresponda, requerirán de la(s) persona(s) que pueda(n) considerarse como beneficiario(s) controlador(es), conforme a lo dispuesto en el artículo 32-B Quáter del CFF, para que revelen su identidad, y proporcionen la información que se detalla en la regla 2.8.1.22.

II. Obtener, conservar y mantener disponible la información fidedigna, completa, adecuada, precisa y actualizada acerca de los datos de la identidad del beneficiario controlador y demás datos que se establecen en la regla 2.8.1.22., para lo cual, las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, según corresponda, deben establecer procedimientos para que la(s) persona(s) que pueda(n) considerarse beneficiario(s) controlador(es) les proporcionen información actualizada de su condición como tales, así como que les informen de cualquier cambio en su condición, para estar en aptitud de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 32-B Quinquies, primer párrafo del CFF.

III. Conservar la información del beneficiario controlador, de la cadena de titularidad y de la cadena de control, la documentación que sirva de sustento para ello, así como la documentación comprobatoria de los procedimientos

de control internos a que se refiere el primer párrafo de esta regla, durante el plazo que señala el artículo 30 del CFF.

IV. Proporcionar, permitir el acceso oportuno de las autoridades fiscales y otorgarles todas las facilidades para que accedan a la información, registros, datos y documentos relativos a los beneficiarios controladores.

Cuando el SAT requiera de los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de personas morales o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica, información relativa a los beneficiarios controladores, lo hará a través de una solicitud de información que les notificará de conformidad con lo establecido en el artículo 134 del CFF.

Las entidades financieras y los integrantes del sistema financiero, para fines de la Ley del ISR, cumplirán con las obligaciones que establece el artículo 32-B Ter, tercer párrafo del CFF de conformidad con lo que establecen los Anexos 25 y 25-Bis.

Información que mantendrán las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica sobre sus beneficiarios controladores

2.8.1.22. Para los efectos del artículo 32-B Ter, primer párrafo del CFF, las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, deberán integrar como parte de su contabilidad

la siguiente información con respecto de cada beneficiario controlador:

- I.** Nombres y apellidos completos, los cuales deben corresponder con el documento oficial con el que se haya acreditado la identidad.
- II.** Alias.
- III.** Fecha de nacimiento. Cuando sea aplicable, fecha de defunción.
- IV.** Sexo.
- V.** País de origen y nacionalidad. En caso de tener más de una, identificarlas todas.
- VI.** CURP o su equivalente, tratándose de otros países o jurisdicciones.
- VII.** País o jurisdicción de residencia para efectos fiscales.
- VIII.** Tipo y número o clave de la identificación oficial.
- IX.** Clave en el RFC o número de identificación fiscal, o su equivalente, en caso de ser residente en el extranjero, para efectos fiscales.
- X.** Estado civil, con identificación del cónyuge y régimen patrimonial, o identificación de la concubina o del concubinario, de ser aplicable.
- XI.** Datos de contacto: correo electrónico y números telefónicos.

- XII.** Domicilio particular y domicilio fiscal.
- XIII.** Relación con la persona moral o calidad que ostenta en el fideicomiso o la figura jurídica, según corresponda.
- XIV.** Grado de participación en la persona moral o en el fideicomiso o figura jurídica, que le permita ejercer los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio o efectuar una transacción.
- XV.** Descripción de la forma de participación o control (directo o indirecto).
- XVI.** Número de acciones, partes sociales, participaciones o derechos u equivalentes; serie, clase y valor nominal de las mismas, en el capital de la persona moral.
- XVII.** Lugar donde las acciones, partes sociales, participaciones u otros derechos equivalentes se encuentren depositados o en custodia.
- XVIII.** Fecha determinada desde la cual la persona física adquirió la condición de beneficiario controlador de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.
- XIX.** En su caso, proporcionar los datos mencionados en las fracciones que anteceden respecto de quién o quiénes ocupen el cargo de administrador único de la persona moral o equivalente. En caso de que la persona moral cuente con un consejo de administración u órgano equivalente, de cada miembro de dicho consejo.
- XX.** Fecha en la que haya acontecido una modificación en la participación o control en la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.

XXI. Tipo de modificación de la participación o control en la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.

XXII. Fecha de terminación de la participación o control en la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.

En los casos de cadena de titularidad o cadena de control a que se refiere la regla 2.8.1.20. se debe contar adicionalmente con la siguiente información:

I. Nombre, denominación o razón social de la o las personas morales, fideicomisos o figuras jurídicas que tienen participación o control sobre la persona moral, fideicomisos o figuras jurídicas.

II. País o jurisdicción de creación, constitución o registro.

III. País o jurisdicción de residencia para efectos fiscales.

IV. Clave en el RFC o número de identificación fiscal, o su equivalente, en caso de ser residente en el extranjero, para efectos fiscales.

V. Domicilio fiscal.

Información que mantendrán los notarios, corredores y cualquier otra persona sobre beneficiarios controladores.

2.8.1.23. Para los efectos del artículo 32-B Ter, tercer párrafo del CFF, los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de personas morales o celebración de fideicomisos o de

cualquier otra figura jurídica, estarán obligados con motivo de su intervención a obtener y conservar, además de la información señalada en la regla 2.8.1.22., fracciones I a XII, la siguiente:

I. Datos de identificación de la notaria, correduría, oficina, así como de la persona titular de ellas ante quienes se haya formalizado el contrato o acto jurídico que dio lugar a la constitución de las personas morales o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica.

II. Fecha de constitución o celebración, conforme a la escritura, acta, póliza, minuta, similar o equivalente que dé soporte a la constitución de la persona moral o celebración del fideicomiso o figura jurídica.

III. El nombre completo de quienes constituyen, integran o son parte de la persona moral conforme al acta constitutiva o escritura pública o participaron en la celebración del fideicomiso o figura jurídica.

IV. Importe del capital social de la persona moral conforme al acta constitutiva o escritura pública o del patrimonio del fideicomiso o figura jurídica.

V. En caso de que con su intervención la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica efectúe modificaciones al capital fijo o capital variable o al patrimonio del fideicomiso o figura jurídica, según corresponda, la información soporte del monto y de los actos o contratos necesarios para ello.

VI. Nombre del administrador único o equivalente, en su caso, miembros del consejo de administración u órgano equivalente.

VII. Datos de inscripción, en su caso, ante los registros públicos o equivalentes.

XIII. Apéndice 3

Preguntas y respuestas sobre beneficiarios controladores emitidas por el SAT

El SAT, en su Portal de Internet, publicó el documento denominado “Preguntas y respuestas sobre beneficiarios controladores”, a través de las cuales se aclara que las personas morales, en cuyo capital participan exclusivamente entes públicos, no están obligadas a proporcionar la información y documentación de beneficiario controlador, toda vez que es el Estado mexicano quien de manera exclusiva controla a la persona moral; en este caso, los fedatarios públicos tampoco están obligados a cumplir con estas obligaciones.

Asimismo, cuando en el capital participan, además de los entes públicos, sujetos de derecho privado, las personas morales y los fedatarios públicos sí tendrán la obligación de proporcionar la información y documentación relacionada con el beneficiario controlador. También se establece que la obligación de obtener y conservar la información de beneficiario controlador, como parte de su contabilidad, es para todas las figuras jurídicas, incluyendo aquellas que no se encuentran inscritas en el RFC.

1. Soy una persona moral en cuyo capital participan exclusivamente dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, o sus organismos descentralizados; los órganos constitucionales autónomos o los poderes legislativo o judicial, federal o local, ¿estoy obligada a proporcionar la información y documentación relacionada con beneficiarios controladores respecto de las personas de derecho público señaladas?

No, toda vez que para efectos del CFF quienes tienen el carácter de beneficiario controlador son las personas físicas, el cual en el presente caso es el Estado mexicano quien de manera exclusiva controla a la persona moral de que se trata.

Fundamento: Artículo 32-B Ter del Código Fiscal de la Federación, reglas 2.8.1.21., 2.8.1.22., 2.8.1.23. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.

2. Soy un fedatario público que da fe en el otorgamiento de un acto jurídico donde interviene una persona moral en cuyo capital participan exclusivamente dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, o sus organismos descentralizados; los órganos constitucionales autónomos o los poderes legislativo o judicial, federal o local, ¿estoy obligado a obtener de la persona moral la información para identificar a sus beneficiarios controladores y adoptar las medidas razonables a fin de comprobar su identidad?

No, toda vez que para efectos del CFF quienes tienen el carácter de beneficiario controlador son las personas físicas, siendo que en el presente caso es el Estado mexicano quien de manera exclusiva controla a la persona moral de que se trata.

Fundamento: Artículo 32-B Ter del Código Fiscal de la Federación, reglas 2.8.1.21., 2.8.1.22., 2.8.1.23. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.

3. Soy una persona moral en cuyo capital participan sujetos de derecho privado y dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, o sus organismos descentralizados; los órganos

constitucionales autónomos o los poderes legislativo o judicial, federal o local, ¿estoy obligada a proporcionar la información y documentación relacionada con beneficiarios controladores?

No, respecto de las personas de derecho público señaladas, toda vez que para efectos del CFF quienes tienen el carácter de beneficiario controlador son las personas físicas, siendo que en el presente caso parte de dicha participación corresponde al Estado mexicano. Respecto de los sujetos de derecho privado, sí tienes la obligación de proporcionar la información y documentación relacionada con beneficiarios controladores.

Fundamento: Artículo 32-B Ter del Código Fiscal de la Federación, reglas 2.8.1.21., 2.8.1.22., 2.8.1.23. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.

4. Soy un fedatario público que da fe en el otorgamiento de un acto jurídico donde interviene una persona moral en cuyo capital participan sujetos de derecho privado y dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, o sus organismos descentralizados; los órganos constitucionales autónomos o los poderes legislativo o judicial, federal o local, ¿estoy obligado a obtener de la persona moral la información para identificar a sus beneficiarios controladores y adoptar las medidas razonables a fin de comprobar su identidad?

No, respecto de las personas de derecho público señaladas, toda vez que para efectos del CFF quienes tienen el carácter de beneficiario controlador son las personas físicas, siendo que en el presente caso parte de dicha participación corresponde al Estado mexicano.

Respecto de los sujetos de derecho privado sí tienes la obligación de obtener de la persona moral la información para identificar a sus beneficiarios controladores y a adoptar las medidas razonables a fin de comprobar su identidad.

Fundamento: Artículo 32-B Ter del Código Fiscal de la Federación, reglas 2.8.1.21., 2.8.1.22., 2.8.1.23. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022.

5. El artículo 32-B Ter del CFF establece que las partes contratantes o integrantes de cualquier otra figura jurídica, están obligadas a obtener y conservar como parte de su contabilidad y a proporcionar al SAT cuando dicha autoridad así lo requiera, la información de sus beneficiarios controladores, ¿esta obligación es únicamente aplicable para las figuras jurídicas que estén obligadas a inscribirse en el RFC o aquellas regidas por las leyes mexicanas?

No, porque el artículo 32-B Ter del CFF no limita su aplicación a figuras jurídicas que estén obligadas a inscribirse en el RFC o aquellas regidas por las leyes mexicanas, por lo que esta obligación también es aplicable tratándose de los trusts, limited partnerships, etc.

Fundamento: Artículo 32-B Ter del Código Fiscal de la Federación.

XIV. Fuentes de Consulta

Libros, revistas, documentos de trabajo y páginas de internet

- Recomendación del GAFI. Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación.
- Guía sobre transparencia y beneficiario final emitida por el GAFI. Para obtener más información relativa al GAFI, visitar el sitio Web: www.fatf-gafi.org
- Ocultación de la identidad de los beneficiarios finales, Julio de 2018, <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/SPANISH-FATF-Egmont-Concealment-Beneficial-Ownership.pdf>
- Informes de Evaluaciones mutuas. Consulta en: [https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/?hf=10&b=0&s=desc\(fatf_releasedate\)](https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate))
- Intercambio de información previa petición, Manual sobre revisiones inter pares. Consulta en: <https://www.oecd.org/tax/transparency/global-forum-handbook-2017-spanish.pdf>
- Informe sobre el GAFI publicado por la SHCP y CNBV. Consulta en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/80948/VSPP_GAFI__13042016.pdf
- Mandato del Grupo de Acción Financiera Internacional (2012-2020). Versión final mayo 2011. Consulta en: https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/Mandato_GAFI_2012-2020%20ESP%20versi%C3%B3n%20final%20mayo11.pdf
- ¿Cuáles son las Recomendaciones del GAFI y cómo afectan a nuestros miembros? Consulta en: <https://www.>

cfatf-gafic.org/es/cuales-son-las-recomendaciones-del-gafi-y-como-afectan-a-nuestros-miembros

- El beneficiario final en los Estados Unidos: los nuevos requisitos de información. Consulta en: <https://www.tmf-group.com/es-co/news-insights/articles/2021/july/ubo-in-the-usa/#:~:text=La%20ley%20define%20a%20un,las%20participaciones%20de%20la%20entidad%22>.
- Estatus de las nuevas obligaciones sobre la identificación de beneficiario final en EE.UU. Consulta en: <https://www.delitosfinancieros.org/estatus-de-las-nuevas-obligaciones-sobre-la-identificacion-de-beneficiario-final-en-ee-uu/>
- Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures. Consulta en: <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/fur/Follow-Up-Report-United-States-March-2020.pdf>
- Avances de los Estados Unidos de América en el fortalecimiento de las medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Consulta en: <http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fur-united-states-2020.html>
- Una Guía para Empresas de Servicios Monetarios, Consulta en: https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/mlp_spa_prevention_guide.pdf
- Código Civil y Comercial de la Nación de Argentina. Consulta en: El ordenamiento legal fue consultado en el sitio URL: http://www.saij.gob.ar/docs-f/codigo/Codigo_Civil_y_Comercial_de_la_Nacion.pdf
- Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – Spain. Consulta en: <https://www.fatf-gafi.org/>

media/fatf/documents/reports/mer4/7-Legal-persons-and-arrangements-Mutual-Evaluation-Spain-2014.pdf

- Regulación sobre beneficiarios finales en América Latina y el Caribe. Consulta en: <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Regulaci%C3%B3n-sobre-beneficiarios-finales-en-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe.pdf>
- MARANO María Eugenia, “Los registros públicos de beneficiarios finales en Argentina: avances y retrocesos de un proceso inconcluso”, agosto 2019, p. 31 y 32, consultable en el sitio URL: <http://www.conferenciabf.org/wp-content/uploads/2019/10/registros-publicos-pdf.pdf>
- Colombia. La prevención es la primera línea de defensa. Consulta en: <https://gafilat.org/index.php/es/miembros/colombia>
- Manual Sobre beneficiarios finales. Consulta en: https://www.dian.gov.co/Documents/Intercambio_de_Informacion_Internacional/Manual_sobre_beneficiario_efectivo_final_o_real.pdf
- Ocultación de la identidad de los beneficiarios finales. Consulta en: <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/SPANISH-FATF-Egmont-Concealment-Beneficial-Ownership.pdf>

Ordenamientos jurídicos

- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- Código Civil Federal.
- Código Fiscal de la Federación.

- Resolución Miscelánea Fiscal vigentes para 2022.
- Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
- Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
- Convenio sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal.

México, al igual que la gran mayoría de los países, concuerda en que las malas prácticas transnacionales deben combatirse a través de una estrecha cooperación entre países, pues esfuerzos individuales resultan insuficientes y estériles. Así, desde su incorporación a la OCDE, nuestro país ha sido receptivo respecto a las iniciativas que formulan los diferentes grupos de trabajo al interior de esta organización, y ha ido fortaleciendo su legislación doméstica.

En este contexto, destacamos que desde 2012, el GAFI y el Foro Global introdujeron la figura del Beneficiario Final y han urgido a los países que los integran a adoptar esta regulación, a efecto de que las autoridades cuenten con la información del beneficiario final y, de esta forma, el intercambio de información entre los países sea una poderosa herramienta para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la evasión y elusión fiscal, todos ellos ilícitos que se dan comúnmente a través de operaciones transnacionales.

En 2021 México aprobó la inclusión en el Código Fiscal de la Federación del Beneficiario Controlador, avanzando en el cumplimiento de sus compromisos y apegándose a los estándares internacionales que exigen niveles de transparencia mínimos con relación a los beneficiarios controladores de sociedades mercantiles, fideicomisos y otras figuras jurídicas.

Dada su importancia, en esta obra se abordan diversos temas como los antecedentes del concepto de beneficiario final, las recomendaciones de GAFI respecto de éste como instrumento para la prevención de lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo, y los razonamientos del Foro de la OCDE sobre la aplicación de estas recomendaciones a partir de un enfoque de transparencia fiscal; seguido de un detallado estudio comparado de su regulación en Estados Unidos, España, Argentina, Colombia y República Dominicana; pasando al análisis del marco jurídico mexicano aplicable, en donde, se destaca el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal en esta materia y las posibles afectaciones a los sujetos obligados y terceros como resultado de estas prácticas.

PRODECON, en atención a lo relevante de la figura del Beneficiario Controlador y a las preocupaciones que han expresado los sujetos obligados, como Ombudsperson fiscal se ha dado a la tarea de integrar el presente estudio con el fin de difundir lo concerniente a este concepto entre los contribuyentes y los estudiosos de la materia fiscal, que les permitirá un mejor entendimiento de estas nuevas obligaciones.